

216 – Mientras Tanto



mientrastanto.e

Número **216** de octubre de 2022

Notas del mes

[Carta de la Redacción](#)

Redacción de mientras tanto

[Patrimonio y renta: distribución primaria y redistribución](#)

Albert Recio Andreu

[Solos en la prehistoria](#)

Juan-Ramón Capella

[¿Qué ha pasado en Chile?](#)

Joan Ramos Toledano

[Neofascismo posmoderno](#)

Albert Recio Andreu

Ensayo

[Identidad, sujeto y hegemonía](#)

Antonio Antón

El extremista discreto

[Kakademia, I](#)

El Rombo

De otras fuentes

La OTAN, la seguridad energética y la nueva guerra fría

Pere Ortega

Un fracaso militar y un entierro

Rafael Poch de Feliu

La guerra se extiende

Rafael Poch de Feliu

Sin impuestos no hay servicios públicos

Agustín Moreno

Debates para un antirracismo radical

Paula López Caballero

¿Feminismo hegemónico o lobby político-académico prohibicionista?

Ana Almirón Mengíbar y Juan Blanco López

Un feminismo para desactivar la reacción

Clara Serra

Trabajadoras del hogar y cuidados: nuevos derechos, aunque insuficientes

Isabel Otxoa

La Biblioteca de Babel

Historia de la Comuna de París

Nota sobre literatura y mercado

En la pantalla

Anatomía de las fronteras

Modelo 77

...Y la lírica

Cuatro paredes y un velo

Fahmida Riaz

Redacción de mientras tanto

Carta de la Redacción

Lector, lectora:

En marzo de 2003, la revista *mientras tanto* comenzó su andadura en la versión digital *mientrastanto.e*. Los casi veinte años transcurridos desde entonces han desactualizado el sistema de gestión de contenidos de su web, lo que nos ha obligado a un cambio laborioso, y todavía en curso, para mantener las herramientas de edición y evitar la pérdida del repertorio histórico, que incluye también la extinta edición impresa.

Esta adaptación, que ha requerido el esfuerzo de varios técnicos, no hubiera sido posible sin la generosa contribución de los lectores a través de [donaciones](#). Cada cual según sus posibilidades ha contribuido al sostén de este proyecto editorial, lo que constituye un nuevo impulso para mantener su periodicidad mensual y su gratuidad. El mantenimiento de la nueva página web seguirá dependiendo exclusivamente de ese sostén.

Nuestro agradecimiento sincero por vuestro apoyo altruista, vuestra fidelidad y la labor de difusión de esta revista que realizáis en vuestros círculos.

Cordialmente,

La Redacción.

Albert Recio Andreu

Patrimonio y renta: distribución primaria y redistribución

Cuaderno pandémico: 13

I

Todo el debate económico actual gira en torno a la distribución de la renta. El de la inflación y el de los impuestos. Las propuestas de rebajas impositivas de la derecha esconden que su objetivo es preservar las rentas del capital. La respuesta del Gobierno defendiendo los impuestos como mecanismo redistributivo soslaya la necesidad de discutir la propia distribución primaria de la renta, la que emerge de la economía privada. El papel redistributivo de impuestos y gasto público es obvio, pero limitarse a él reduce el espacio de las políticas necesarias, olvida cuestiones cruciales que cualquier política transformadora debe contemplar.

El crecimiento de las desigualdades a lo largo de las últimas décadas se ha debido tanto a cambios en la distribución primaria como a una contrarrevolución fiscal en favor de los ricos. A la primera ha contribuido tanto la ampliación del ejército de reserva derivada de la globalización (deslocalizaciones, uso de la competencia internacional como coartada a las devaluaciones salariales) como las propias transformaciones del modelo laboral en los países ricos: reformas laborales que han reforzado los derechos del capital, ataques a la organización sindical, transformación de la organización empresarial mediante el uso masivo de subcontratas y externalizaciones, devaluación social de los trabajos manuales, leyes de extranjería que producen una masa laboral sin derechos (o con derechos disminuidos), crecimiento del empleo a tiempo parcial y temporal, políticas de austeridad... Cada país tiene su propio modelo de cambio, pero, con ritmos diversos, se ha producido una pérdida de peso de los salarios y un aumento de las desigualdades salariales.

A este ataque a las condiciones laborales en el núcleo de la organización productiva se han sumado los cambios en los sistemas fiscales que, en términos generales, han reducido la progresividad de los impuestos y en especial han permitido a los muy ricos eximirse de gran parte de sus contribuciones. En algunos casos se ha tratado de reformas muy burdas, de recorte de los tipos impositivos más progresivos, pero en muchos casos se trata de operaciones más sofisticadas favorecidas por la complejidad de las normas fiscales, por la proliferación de formas de desgravación (es lo que permite a las grandes empresas pagar una cantidad ridícula en el Impuesto de Sociedades). Y, sin duda, facilitado por el sistema financiero y fiscal internacional, que permite a las grandes empresas y las grandes fortunas situar en el país adecuado cada una de sus actividades con objeto de minimizar su aportación fiscal.

Las crecientes desigualdades son resultado de la combinación de todas estas dinámicas. Es necesario tenerlas en cuenta a la hora de pensar en cómo combatirlas. Al centrarse sólo en los aspectos fiscales se pierden de vista cuestiones fundamentales.

II

El olvido del papel que juegan los cambios en la distribución primaria de la renta no es baladí. Tiene que ver con la lógica del pensamiento económico dominante, que incluye a la gran mayoría de economistas de la llamada socialdemocracia. Según este pensamiento, los mercados son eficientes, premian la productividad, favorecen la eficiencia. Cualquier intervención en los mismos genera distorsiones. Mejor no intervenir en ellos. Que los mercados generen desigualdades es inevitable, pero lo único posible es tratar de paliarlas por medio de políticas fiscales. Soy consciente de que acabo de presentar una caricatura. Hay mucho economista convencional que es consciente de las “imperfecciones” de los mercados, de que son necesarias políticas diversas para mejorar la eficiencia social. Pero, en general, predomina la visión de que éstas son cuestiones menores, y que más vale dejar que los mercados funcionen y no regularlos excesivamente.

Siempre se ha reconocido que el mercado laboral, el proceso por el cual se fijan los salarios, constituye un espacio donde las instituciones juegan un importante papel: las normas laborales, los sindicatos, la negociación colectiva, las leyes migratorias, el sistema educativo, las instituciones de género etc., influyen en la estructura salarial. No hay dos países con un modelo laboral idéntico. Pero, a menudo, el mercado laboral es considerado como un mercado donde esta regulación distorsiona su correcto funcionamiento. En gran medida, esta ha sido la justificación intelectual utilizada para legitimar la oleada de reformas neoliberales y ataques a los sindicatos iniciada en la década de los setenta.

Pero, lo que es aplicable al mercado laboral, también vale para el resto de mercados. No sólo porque las dinámicas de acumulación generan fácilmente todo tipo de oligopolios y monopolios. O que la mayor parte de actividades humanas tienen efectos externos de muy diversos tipos. También porque las mismas normas de propiedad sobre las que se asienta todo el funcionamiento social son en sí mismas resultados de intervenciones institucionales que acotan derechos sobre el producto social. En los últimos tiempos tenemos ejemplos palmarios del papel de las regulaciones en el funcionamiento de los mercados. En primer lugar, el tema de las tarifas eléctricas, diseñadas por la Unión Europea y que han generado enormes beneficios “caídos del cielo” a las grandes empresas del sector. En segundo lugar, la cuestión de las patentes farmacéuticas, totalmente abusivas y que explican, en parte, las grandes rentabilidades del sector. En tercer lugar, el tema de las grandes compañías de internet, beneficiadas por una regulación favorable que ha permitido construir monopolios colosales. En cuarto lugar, los bancos, que son tan grandes que no pueden quebrar, sostenidos cuando hace falta por los Estados y los gobiernos centrales. En quinto lugar, las políticas urbanísticas y de vivienda, uno de los núcleos de la corrupción en nuestro país. Y en sexto lugar, un tema menor pero vistoso, el de la regulación de las terrazas de los bares, una forma de conceder a empresas privadas el uso de espacio público con efectos externos importantes (ruido, molestias a peatones...), y que aumentan los alquileres potenciales que pueden reclamar los tenedores de locales comerciales. Podría seguir con miles de ejemplos, pero estos son suficientes para mostrar que la mayoría de mercados son objeto de regulaciones específicas que tienen un papel crucial en su rentabilidad.

III

No entrar en este debate sobre el carácter institucional, no natural, de la distribución primaria de

la renta constituye un error grave por dos cuestiones básicas. En primer lugar, porque impide discutir la bondad social de estas mismas regulaciones, impide analizar los mecanismos por los cuales unas personas se enriquecen y otras no. En un momento de inflación aguda, donde unos precios suben más que otros, un análisis detallado del funcionamiento de cada mercado particular permitiría ver si la inflación es provocada por políticas abusivas por parte de algún sector empresarial, si es el resultado de una mala organización de la actividad (como el problema de los parones en los suministros), o hay factores regulativos inadecuados. Es la única forma de encontrar respuestas diferentes a las ortodoxas que simplemente se basan en parar la actividad económica como forma de detener la inflación.

Pero, en segundo lugar, el no debate sobre la distribución primaria conduce al bloqueo de las políticas redistributivas fiscales. Si el funcionamiento del mercado se considera "natural", la distribución que emerge de su funcionamiento es la que retribuye a cada individuo por sus méritos. La redistribución se visualiza entonces como un ejercicio por el que se sacrifica a los que tienen mérito en beneficio de los incompetentes y los vagos. Se requiere en este caso del recurso de culturas tradicionales como la caridad cristiana o la solidaridad entre iguales para que la gente, o al menos una parte significativa de la población, acepte un sistema fiscal redistributivo. Gran parte de las revueltas fiscales, de las políticas anti-impuestos (en realidad, pro-ricos) de la derecha y del mismo deslizamiento conservador de la población tiene que ver con esta construcción ideológica de mercados eficientes y redistribución caritativa.

El marxismo clásico propició una explicación de la desigualdad en clave institucional y estructural. Sigue siendo un buen punto de partida, aunque requiere reforzarlo con otros análisis que ayudan a comprender la complejidad del mundo actual. El feminismo y el análisis del racismo y el colonialismo han aportado nuevas luces. También el análisis del funcionamiento real de los mercados concretos, más allá de los mega análisis del capitalismo. Y también los análisis críticos sobre los sistemas educativos son cruciales en un mundo donde la educación se ha universalizado, y ha ayudado a reforzar la idea de que lo que cada cual recibe es fundamentalmente resultado de su mérito y esfuerzo. Porque para entender por qué el discurso simplón de la derecha consigue arraigar, cuando sus políticas impositivas son tan descaradas, hay que reconocer que ha conseguido imponer la idea que no hay que cuestionar el marco institucional en el que opera la economía capitalista real.

IV

Estamos ante un conflicto distributivo de grandes dimensiones. La inflación está generando una nueva devaluación salarial que puede resultar tanto o más devastadora que la propiciada por las políticas de austeridad y reformas estructurales de hace 10 años. Los sindicatos tienen razón en su propuesta de mantenimiento del salario real, pero tienen pocas posibilidades de éxito a menos que tuviera lugar una movilización masiva que no consigo percibir. Tienen en su contra a casi todas las élites políticas, a las que les preocupa la inflación, pero sólo son capaces de percibir espirales inflacionistas cuando se trata de aumentar salarios (y son absolutamente incapaces de proponer medidas que moderen efectivamente las rentas empresariales). Cuentan, además con la negativa patronal a negociar (la CEOE ha copiado la táctica del PP en la renovación del Consejo General del Poder Judicial). Y es que también ahí hay una desigualdad estructural. Mientras que los salarios se fijan, en el mejor de los casos, por negociación colectiva entre las partes, los precios que determinan parte de las rentas empresariales se establecen de forma

autónoma por los propios empresarios, sin negociación alguna. Y a ello se suma la amenaza de la derecha de reducir su política anti-inflación a rebajas generalizadas de impuestos que dejen intactas las rentas empresariales y que propicien nuevos recortes en los servicios y las rentas públicas. Por eso es tan necesario reforzar el discurso sobre la relación entre los dos espacios de determinación de la renta y entrar a fondo en propuestas que afecten a la distribución primaria, a los derechos de propiedad.

La necesidad de este enfoque no es sólo coyuntural. La crisis ecológica impactará de forma crucial en la actividad económica. A corto plazo, va a ser percibida como una pérdida de bienestar en una población socializada en la visión de un progreso material ilimitado. Pero la forma que adopte el proceso tendrá mucho que ver con los mecanismos institucionales y los proyectos que prevalezcan. Previamente a las sociedades capitalistas modernas han existido muchas sociedades globalmente más austeras pero marcadas por desigualdades insoportables. Cualquier visita turística a viejos palacios, castillos u otra construcción monumental permite percibir la enorme distancia que existía entre el lujo de unos pocos y la extrema pobreza de la mayoría. Por ello, es más necesario que nunca discutir las bases que legitiman la desigualdad, para garantizar una transformación social que sea, a la vez, ecológicamente racional y socialmente justa.

Juan-Ramón Capella

Solos en la prehistoria

Hemos llegado a un punto en que parece que estamos en la prehistoria. En una nueva prehistoria Antes de que la historia verdadera comience o recomience, si es que ha de recomenzar. Sin duda vendrán las catástrofes —o «dificultades», para los que se la pillan con papel de fumar— ligadas a la gran crisis ecológica del industrialismo y el consumismo. Pero las catástrofes forman parte de la historia como el escenario en que se desenvuelve la historia voluntariamente humana. Y la historia, es verdad, parece haberse detenido en este estadio de capitalismo paroxístico que sufrimos.

¿Pero no tenemos una tecnología en imparable avance que nos sacará de ésta?

La tecnología puede introducir cambios, pero está en manos de quien está. Aunque se pueda intervenir quirúrgicamente a distancia, eso no es para las personas corrientes, sino para quien lo puede comprar. No por mucho teclear en nuestros aparatejos va a cambiar la historia.

La verdadera historia de progreso social, lo sabemos, es obra de la multitud. No hay progreso social de otra manera Y la multitud, hoy, no está por la labor. Más bien adopta en dispersión, atomizada, la forma reformista, de la mala socialdemocracia: la de encogerse para no recibir demasiados palos. No la revolucionaria de resistir de verdad, de tratar de devolver golpe por golpe. Por eso la multitud, educada por el capital en el consumismo, no existe políticamente. Hay, efectivamente, en nuestro mundo, puntos de resistencia, de solidaridad social, de decencia, pero en el fondo resultan, hoy por hoy, políticamente irrelevantes —perfectamente tolerables por el poder real— aunque son más que necesarios y valiosos socialmente.

Para nosotros el riesgo peor es el de desnaturalizarse, el de abandonar las posiciones que siempre hemos defendido, creyendo que eso es inútil. Sin duda hay que cambiar muchas cosas, pero en lo esencial hay que seguir igual.

Mira a tu alrededor: verás mucho pingo almidonado. No querrás nunca verte a ti mismo así.

No habrá credo al que aferrarse. Ni credo, ni tribunos. Lo que suceda será una suma de respuestas a situaciones insostenibles. Pero también sabemos que las situaciones insostenibles se sostienen duraderamente: basta ver lo que ocurre en la guerra entre Rusia y Estados Unidos a través de Ucrania. Duradera. Y es un mal ejemplo, pues esa guerra es solo un episodio de otra mayor y más amplia en la que nos quieren encajar, en la que ya han empezado a encajarnos.

Algo cambiará —es de esperar— porque en el fondo nada del mundo es estático. Que las respuestas a lo insostenible —a la destrucción de los bienes-fondo de la naturaleza, que no tendrán las generaciones siguientes; a salarios que no permiten formar familias; al hambre de niños que comen una vez al día en el centro mismo del Imperio; a la falta de respeto de tantos hombres para con las mujeres; a la pérdida generalizada del respeto y del pudor; al horror de una cultura hecha de gritos publicitarios que impiden pensar a tantos; a la desaparición del silencio—: que las respuestas a lo insostenible confluyan, que se forme de nuevo *una multitud densa* será cosa de los resistentes mismos. Nada está escrito de antemano.

Llevamos ya mucho tiempo viviendo una prehistoria de barbarie y conformismo, de entretenimiento con los *gadgets* tecnológicos que nos enajenan, de darle vueltas y más vueltas al pasado pese a que sabemos muy bien que agua pasada no mueve molino.

Las vidas de los seres humanos no tienen más sentido que el que los humanos le queramos dar. La enajenación contemporánea, oficial, dice implícitamente que el sentido de la vida humana es divertirse hasta morir. Lo peor no es que la mayoría ni siquiera pueda permitirse eso pese a trabajar hasta enfermar. Lo peor del presente es que una amplia mayoría de personas ni siquiera se pueden plantear qué sentido quieren dar a sus vidas y menos aún materializar prácticamente ese sentido, realizarlo. Si logran ver con nitidez la esclavitud cultural a la que están sometidas —la ideología enajenante que las aprisiona— podrían llegar a ser nuevos Espartacos.

Temo que el progresismo oficial, con sus falsas alegrías, pase factura, esto es, que muchas gentes, hartas de inanidades, engrosen las filas de la reacción derechista. Mucha España vaciada, muchos complementos dinerarios miserables, violencia de género explícita como nunca, muchos aplausos a los explotados sanitarios... Pero una cosa es predicar y otra dar trigo, y el sistema se guarda el trigo para los silos dinerarios de esos ricos de ahora, modelos para multitudes, que calzan zapatillas deportivas.

Joan Ramos Toledano

¿Qué ha pasado en Chile?

Algunas claves para entender el rechazo masivo a la propuesta de nueva Constitución

I

El domingo 4 de septiembre va a ser una fecha para la historia en Chile. Tal vez no porque el resultado del plebiscito de salida —nombre que ha recibido el referéndum sobre la aprobación o no del texto constitucional propuesto por la Comisión Constituyente, y en el que se llevaba trabajando casi año y medio— haya sido el esperado, especialmente desde posiciones de la izquierda. Tampoco se recordará, obviamente, porque fuera el punto de partida de una constitución nueva que dejara definitivamente atrás la sombra del gobierno militar pinochetista e iniciara el camino para un Chile alejado del ultraliberalismo que viene siendo el eje vertebrador de la economía del país, así como de sus relaciones sociales y del papel del Estado. Hay que ser claros: el resultado es muy contundente, pues el rechazo ha ganado con casi el 62% de los votos, y ha ganado en todas y cada una de las regiones del país y en casi todos los municipios. Esta situación imposibilita cualquier lectura que no sea la de aceptar el fracaso (siquiera temporal) del proyecto —político, social y económico— que abanderaba la nueva constitución y quienes apoyaban la aprobación de la misma. Y, por tanto, hace falta cierta autocritica por parte de la izquierda política del país, que de forma explícita apoyó (y una parte surgió de) el denominado «estallido social» de 2019, el proceso constituyente y el texto que salió del mismo.

Por supuesto, hay diversos aspectos que han influido en el resultado de esta votación, que nos deja una extraña secuencia de eventos en apenas tres años: un movimiento social potentísimo, que puso en jaque al gobierno anterior y obligó a convocar un plebiscito para decidir si se quería o no una nueva constitución; una segunda elección, que implicó la conformación de una Comisión Constituyente (órgano encargado de elaborar la propuesta de constitución), y en el que la izquierda se vio ampliamente representada (supuso una dura derrota de la derecha y de algunos partidos liberales tradicionales); finalmente, unas elecciones presidenciales, del pasado septiembre de 2021 (primera vuelta) y diciembre (segunda vuelta) en las que el Frente Amplio^[1] logró la victoria, así como hacerse con el Gobierno. En Chile, al ser el sistema presidencialista y no parlamentario, la figura del presidente —Gabriel Boric— tiene mucho más peso y relevancia que el partido al que pertenece o que le apoya explícitamente. No obstante, esta última elección fue hartamente ajustada. El candidato de la ultraderecha, José Antonio Kast, ganó en primera vuelta y estuvo a poco de lograrlo también en la segunda. El dato es relevante porque puede interpretarse como un indicio de lo que estaba por venir, o de cierto agotamiento del impulso de posturas contrahegemónicas tras el estallido social, o incluso un retorno de ciertas personas a posiciones más conservadoras.

II

Que el resultado es contundente, como se ha dicho, es innegable. Sin embargo, no se puede obviar la durísima campaña de contrainformación, noticias falsas, informaciones no veraces, exageradas o manipuladas, que han rodeado todo el proceso constituyente. Desde que se

constituyó la Asamblea Constituyente, el ataque mediático y político al proceso ha sido incesante. Dos ejemplos nos permiten ver el nivel de crispación que se generó en el país, en el que se hizo creer a la gente que la nueva constitución podía conllevar cambios como un ataque frontal a la igualdad, con ciudadanos de primera y segunda clase —por las concesiones a las comunidades indígenas, largamente oprimidas desde el Estado— el fin de la propiedad privada —por el reconocimiento de derechos colectivos y el papel interventor del Estado—, o la sustitución de la bandera y el himno —falsedades informativas, sin efectos prácticos, pero que aluden a ese espacio de lo nacional-patriótico que cuesta mucho de permear con argumentos racionales—. El primer ejemplo de esta crispación fue la agresión de un diputado de la derecha al vicepresidente del Congreso Nacional, sede de la soberanía popular del país, tras una sesión parlamentaria. Agresión física, con empujones, patadas y puñetazos. El segundo, la agresión física de varios individuos al hermano del presidente del gobierno frente a la Universidad de Chile, en la que el agredido trabaja como periodista. Se trata de dos ejemplos puntuales, sin mayor trascendencia política que la que se le quiera dar, pero que ponen de manifiesto que el país se había polarizado de forma un tanto peligrosa con todo el proceso constituyente y las últimas elecciones.

Estos ejemplos, además, nos permiten plantear otro posible motivo del rechazo al texto constitucional: la intensidad de cambios que implicaba la nueva constitución, sumado al hecho de que en este plebiscito el voto era obligatorio, por lo que se movilizó una gran parte de población que tradicionalmente tal vez no votaba, y que ahora se vieron obligados a hacerlo. Sumado a la campaña mediática y a la edad avanzada de muchos de estos «nuevos» votantes, es posible que hubiera un voto oculto (silencioso), poco preocupado por la participación política pero conservador en sus posiciones, y que ha decantado claramente la balanza. En términos absolutos, la cantidad de votos que aprobaron el nuevo texto es similar a los que recibió Boric en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, lo cual parece indicar que todavía existe un voto fiel a ese proyecto, pero que deviene minoría (aunque muy amplia) ante unas elecciones dicotómicas (donde sólo había dos posibles opciones) y con voto obligatorio.

En cuanto al contenido del texto en sí, diversas cuestiones han podido jugar en contra de la campaña del apruebo. De un lado, es necesario entender el conservadurismo generalizado de una sociedad como la chilena. Aspectos de igualdad de género, discriminación positiva, legislación protectora del colectivo LGTBI+, legalización del aborto, o intervención estatal en la economía son cuestiones complejas en el país, vistas con mucho recelo por las élites político-económicas, y que cuentan con campañas mediáticas de apoyo importante. Además, hasta los años '90 Chile no disfrutó de cierta apertura democrática, por lo que el aparato jurídico-estatal mantiene ciertas rémoras de la dictadura —una cuestión que conocemos bien en España, por ejemplo con el poder judicial— y ha contribuido a moldear una sociedad profundamente individualista, en la que la cultura neoliberal del *esfuerzo*, el *hacerse a sí mismo*, y el *emprendimiento* son vistas como aspectos positivos. La derecha no tiene, en ese sentido, ningún reparo en repetir que los/as chilenos/as *confían más en que su dinero lo gestionen empresas privadas que políticos*. Probablemente, en esta desconfianza estatal tenga mucho que ver no solo la historia reciente de Chile, sino los excesos —demoledores, en algunos casos— que han tenido algunos gobiernos latinoamericanos bajo la excusa de luchar contra los poderes económicos y la promesa de mayor igualdad.

Del otro lado, considero que es necesario aceptar que el texto constitucional propuesto era —dejando de lado cuestiones técnicas— muy ambicioso. Planteaba, al menos en esencia, el

salto de un Estado ultra-liberal a un estado fuertemente intervencionista, con derechos sociales, reconocimiento de identidad y territorios indígenas, protección de elementos medioambientales y supresión del papel meramente observador o subsidiario del Estado. Además, en lo social se colocaba a la altura de una constitución nueva, moderna, laica y respetuosa con colectivos tradicionalmente discriminados. En suma, un salto tal vez demasiado grande sin ciertos pasos previos. Para que se entienda: el estallido social en Chile provocó (casi) pasar de una constitución aprobada en dictadura (aunque con bastantes modificaciones posteriores) y un gobierno de derecha conservadora (estilo Partido Popular) a un gobierno de lo que sería el equivalente a Podemos en España, con una Constitución redactada mayoritariamente por lo que sería Podemos y Partido Socialista Obrero Español (en Chile, Frente Amplio y Partido Socialista). Si a ello le sumamos la campaña mediática y ciertos errores que cometieron los partidarios del apruebo, es posible entender que el voto haya sido tan mayoritariamente de rechazo. Lo que implica que se está produciendo, probablemente, un proceso de cambio sin marcha atrás, pero también que la izquierda debe recomponerse, continuar el proceso constituyente tratando de jugar un papel relevante pero también tender la mano a partidos de otras posturas ideológicas para garantizar un apoyo social mayor. Una constitución no es una ley cualquiera, y debe establecer unos fundamentos democráticos que posibiliten también gobiernos de otro color político.

III

Y ahora, ¿qué? Se trata de la pregunta del millón. Técnicamente, en el llamado *plebiscito de entrada* la sociedad chilena votó de forma aplastante por una nueva constitución (alrededor del 80%). Es decir, de forma tácita se mostró un rechazo claro al actual texto constitucional de 1980. Sin embargo, la propuesta de la Convención Constituyente no convenció y también fue rechazada. Aquí se abren dos posibles vías: una de ellas, dar por terminado el proceso constituyente. No parece realmente viable, pues sigue existiendo no sólo un mandato claro —referéndum mediante— de la ciudadanía de cambiar la norma fundamental, sino también una pulsión social latente que reclama cambios profundos en la estructura del Estado chileno. La otra vía es recoger ese guante y tratar de ponerse de acuerdo políticamente para decidir de qué forma se va a redactar un nuevo texto que (ojalá) goce de mayor apoyo que el recientemente rechazado. El problema en ese sentido es que ya empiezan a surgir voces que hablan de delegar dicha función a un *grupo de expertos juristas*.

Esa postura tecnocrática lleva implícita, a mi parecer, el riesgo de tratar de evitar una *politización* del nuevo texto que en el fondo es necesaria e ineludible. Pero bajo la excusa de que sean «los/as expertos/as» quienes redacten el texto, ciertos derechos con carga económica —derechos sociales— pueden quedar sepultados e ignorados; al fin y al cabo, si de algo ha hecho gala Chile en las últimas décadas ha sido de su estabilidad y crecimiento económico siguiendo fielmente las recetas neoliberales que en su momento plantearon los Chicago Boys. La gente suele olvidar que, junto a Thatcher en Reino Unido y Reagan en EEUU, Chile ya se había convertido en el *conejillo de indias* del neoliberalismo tras el golpe militar contra Allende en el '73. Lo que no se suele decir es que, junto a los datos de estabilidad y crecimiento económico, la desigualdad se ha ido haciendo más patente y más insoportable, proporcionalmente mayor a otros países vecinos cuyas economías son en principio más débiles (ej. Bolivia). El problema, entonces, no estaría tanto en quién decide el contenido de un nuevo texto constitucional, sino en que se vean verdaderamente representados los diferentes intereses y posturas del país, de forma

que pueda existir una base suficientemente amplia de votantes a favor de la nueva Constitución. Es decir, es posible que Chile necesite acercarse primero a posturas de lo que en Europa llamaríamos *socialdemocracia*, con un Estado intervencionista y asistencial que tratara de mejorar la vida de las personas, antes de lanzarse a un modelo que implique cambios tan profundos. Ciertamente, esta postura casa mal con las necesidades de mucha gente, que sufre a diario y sin tiempo para grandes debates —aunque afrontar ese problema es tarea del gobierno, no de un hipotético texto constitucional futuro— y, sobre todo, con las necesidades imperiosas de un contexto medioambiental que nos está poniendo en jaque a todos y todas, independientemente del país o el color político. Pero también es cierto que las prisas son malas consejeras, y parece más relevante afianzar el proceso de cambio que se vive en Chile desde el octubre de 2019 que arriesgar a perder ese envite social y terminar igual o peor que antes de empezar. Viendo cómo evoluciona el resto del mundo, con el avance del neofascismo (Suecia, Italia, Hungría) y el conflicto militar (real, en Ucrania, y potencial, respecto a China, Rusia y EE.UU.), no es descartable —y menos en Latinoamérica— una intervención militar (hablemos claro, un golpe de Estado) si las élites político-económicas se sienten excesivamente amenazadas.

Puede parecer un pronóstico algo pesimista, pero junto a las aspiraciones —legítimas, y necesarias— de cambio, y a las ideas y propuestas que se han planteado hasta ahora, también es necesario ser realista y evitar un desgaste muchas veces irreparable durante años del proyecto político que ha conquistado el gobierno. Es necesario que la izquierda del país tome consciencia de lo paulatino de los cambios, y se esfuercen en pequeñas conquistas que, a largo plazo, pueden contribuir a retroalimentar esa fuerza social que claramente se dejó sentir en las calles. Una buena medida sería recuperar el casi desaparecido movimiento sindical del país^[2], reclamar que exista un derecho real de huelga (ahora mismo sólo se permite la huelga en procesos específicos de negociación colectiva, nunca en otros supuestos) y, por tanto, contar con una fuerza social que, aunque politizada, no sea necesariamente —o únicamente— de *políticos profesionales*, e ir transformando un imaginario social que actualmente se mueve más en la lógica del *fin de los tiempos* (y de las clases sociales) que en una autoconsciencia de desigualdad material rampante. Sirva como anécdota la expresión «mentalidad de obrero», que en Chile viene a representar a la gente que no tiene iniciativa ni aspiraciones, y únicamente quiere trabajar lo menos posible para cobrar el salario y, en todo caso, recibir ayudas.

1. El Frente Amplio es un partido político fuertemente influido por movimientos sociales —algo parecido a lo que ocurrió en España con Podemos y el 15M— con pretensión de aglutinar todo lo que estaba a la izquierda del Partido Socialista, y que canalizó, al menos parcialmente, el enojo y las reivindicaciones del estallido social de 2019. [?](#)
2. El gobierno militar de Pinochet hizo un muy buen trabajo desarmando todo el sistema sindical chileno, así como demonizando a la izquierda al completo y, especialmente, al movimiento comunista, que sin embargo ha logrado mantenerse con representación política y participación activa en diversos aspectos de la gestión de lo público, como algunas alcaldías. Respecto del anticomunismo en Chile, es sugerente la lectura de Verónica Valdivia Ortiz de Zárate, *Pisagua, 1948. Anticomunismo y militarización política en Chile*, LOM Ediciones, 2021; y Hertz, C., Ramírez, A., Salazar, M., *Operación Exterminio. La represión contra los comunistas chilenos (1973-1976)*, LOM Ediciones, 2016. [?](#)

Albert Recio Andreu

Neofascismo postmoderno

I

El ascenso de la extrema derecha europea no cesa. La victoria electoral de Fratelli d'Italia es el caso más significativo. Igual de impactante que el segundo puesto conseguido por la extrema derecha sueca, que le puede llevar al Gobierno. Hace años, Italia y Suecia eran dos modelos para la izquierda. Italia, el país occidental con el mayor Partido Comunista y con una pléyade de grupos a su izquierda de enorme vitalidad (para mí, *il Manifesto* ha constituido una de las mejores publicaciones de la izquierda). Suecia, la experiencia socialdemócrata más madura, el país que durante años ha obtenido los mejores indicadores en términos de bienestar e igualdad. Hoy el PCI y su izquierda han desaparecido del mapa político, y pese a que la izquierda sueca ha obtenido un mejor resultado ha sido incapaz de superar a la marea derechista que cada vez resulta más preocupante. Nos merecemos un análisis en profundidad del proceso, más allá de los errores que ha cometido todo el espectro de la izquierda (empezando por la autodisolución del PCI y su conversión en un Partido Demócrata con una trayectoria errática). Pero una oleada de este tipo obedece a un proceso más profundo, de transformación de las sociedades desarrolladas, que es necesario entender si de verdad queremos trabajar para que las cosas cambien. El hecho de que el neoliberalismo se haya podido implantar sin alterar sustancialmente los procesos democráticos indica que la aceptación de las desigualdades y los desastres que ha propiciado se han podido implantar sobre una base social que ha sido incapaz de reaccionar. En cierta medida, la oleada derechista es una continuación de este proceso de anomia social generado por las dinámicas económicas y sociales de las sociedades maduras. Por eso, creo que la cuestión requiere un análisis transversal que permita entender los mecanismos, las dinámicas y las estructuras que han propiciado esta evolución social que conduce a la minimización de la cultura de izquierdas.

II

La eclosión del fascismo clásico obedeció a una situación fácilmente entendible: el miedo de las clases dominantes a la revolución y a un pujante movimiento obrero que cuestionaba derechos y privilegios. Fue una respuesta brutal propiciada por élites estatales y locales ante lo que percibían como una amenaza total. En países como Italia y Alemania contaban además con una masa social brutalizada por su experiencia en la Primera Guerra Mundial, desmoralizada por la traumática post-guerra que constituyó una masa de choque fundamental para lanzar el movimiento. Había un contexto y había unos intereses que explican, en todas partes, las raíces sociales y económicas del viejo fascismo. De hecho, incluso en países como Francia o Reino Unido es fácilmente constatable que gran parte de las élites capitalistas vieron con bastantes buenos ojos el surgimiento del fascismo. La trágica historia de la 2ª República tiene mucho que ver con la negativa de Francia y Reino Unido a darle un soporte real, mientras consentían el apoyo crucial de nazis y fascistas a Franco y los suyos. Actualmente no existe el impulso colonial que condujo a las dos guerras mundiales. Ahora el imperialismo funciona de otro modo y, cuando menos, ninguna de las naciones europeas estaría en condiciones de lanzar una expansión territorial (el caso de los EE.UU. es diferente, pero su modelo imperial es distinto al que aspiraban

Hitler, Mussolini y Franco).

Hoy en día, la situación es completamente diferente. Más de cuarenta años de gestión neoliberal han debilitado a las clases trabajadoras, las han fragmentado y han difuminado gran parte de la conciencia colectiva. No existe una propuesta consolidada, social y política, de alternativa al capitalismo. Las amenazas que perciben las élites del viejo imperio americano, especialmente de China, no tienen una traslación a la dinámica interna de los países occidentales (como sí representaban en algún momento los partidos comunistas o el movimiento anarquista). Por eso es necesario analizar con más detalle a que responde esta nueva oleada protofascista.

Una primera cuestión sería estudiar quién está financiando el proceso. Es materialismo vulgar, pero puede ayudar a tener pistas. Serviría para conocer si hay sectores de la burguesía interesados en financiar a estas iniciativas. De hecho, sabemos que la derecha norteamericana recibe importantes fondos de algunos altos magnates de fuertes convicciones ultramontanas. También conocemos el papel de las energéticas en financiar el negacionismo climático. No sería raro que también estuvieran apoyando a los ultras. Un capitalismo que ha derivado hacia un modelo de gestión totalmente autoritario puede generar muchos especímenes a quienes atraiga la emergencia de partidos neofascistas. Y también están las iglesias y las sectas cristianas reaccionarias. Al fin y al cabo, uno de los ejes principales de intervención de esta extrema derecha lo constituye todo lo que tiene que ver con la familia y la moral tradicional. El feminismo y la revolución sexual han contribuido a minar la hegemonía moral de la iglesia. En los países desarrollados (EE.UU. es caso aparte) las iglesias se sienten amenazadas de muerte, y pueden ver en la extrema derecha una tabla de apoyo. Y tener al lado a las iglesias, o sectores importantes de las mismas, suele ser útil para obtener recursos y medios, pues una de las capacidades reconocidas de las mismas es la de captar ingresos de sus fieles o del Estado. Sugiero que este apartado merece estudios en profundidad. Sobre todo para tratar de ver si existe un creciente apoyo de élites económicas a estas formaciones o se trata sólo de un fenómeno circunscrito a unos pocos empresarios. De ocurrir lo primero estaríamos en el escenario más preocupante de un movimiento que constituyera una parte orgánica del capitalismo de la postpandemia, la guerra y la crisis ecológica.

Una segunda cuestión son los contenidos. Los analiza detalladamente Steven Forti en *Fascismo 2.0* y son bastante obvios: nacionalismo cerril, racismo y xenofobia, antifeminismo, anti-homosexuales, antiecológico, anticomunismo (en un sentido muy amplio que implica casi cualquier acción pública socializante). Uno diría que construyen su atractivo explotando todos los miedos y los prejuicios de los machos tradicionales. Y ello mediante una hábil demagogia para penetrar entre los sectores con menos cultura política, y más proclives a una respuesta pasional. De hecho, no es más que una puesta al día de las viejas ideas reaccionarias en una situación en la que las migraciones internacionales se han intensificado y donde el patriarcado está sometido a un cuestionamiento abierto. Por eso, su primer banderín de enganche es la xenofobia y el racismo, porque es lo que más conecta con un amplio sector social que ha mamado toda su vida el racismo implícito del eurocentrismo. Me parece más difusa en cambio su visión económica, en la que ha desaparecido el modelo corporativo que planteó el viejo fascismo, donde las propuestas proteccionistas se combinan con enfoques neoliberales radicales. Y es que, en los tiempos actuales de globalización e Unión Europea, es imposible sostener propuestas de tipo autárquico como en el pasado. Por ello considero que el neofascismo actual tiene buenas posibilidades de acabar convergiendo con la derecha convencional si la dureza de los tiempos convierte en más

deseable, para las élites económicas, reforzar el autoritarismo estatal. Al fin y al cabo, nunca ha estado claramente definida la frontera entre derecha civilizada y derecha fascista (en España la gente de Vox ha estado muchos años dentro del PP), y muchos de los grandes temas son compartidos con matices. Y, por tanto, me parece que lo de aislar a la extrema derecha era un cuento que duraría hasta que fuera necesario un pacto. Como ya ocurrió en Austria, y como ahora se plantea en muchos otros países. Más que una cuestión de principios, era una cuestión de oportunidad, de coyuntura.

La amenaza de una involución autoritaria es obvia. Ya hubo un giro en esta dirección con el gobierno de Rajoy. Y ya conocemos las experiencias de Hungría y Polonia. En un encadenamiento de crisis como la actual, la tentación de Gobiernos autoritarios fuertes que restrinjan libertades para garantizar sus intereses puede ser imparable. De hecho, a escala local, desde mi punto de observación en el movimiento vecinal, llevamos meses detectando una situación de acoso continuado al Gobierno municipal y a todos los movimientos sociales que les molestamos. Y resulta relevante que uno de los principales focos de ataque haya sido un moderado reglamento de participación (aprobado por la mayoría de grupos municipales), o sea un reglamento que simplemente concede un pequeño espacio de acción a entidades y vecindario. Se trata de una política que construye obstáculos institucionales a los de abajo, que acaba por criminalizar todo aquello que se opone a sus ideas, que bloquea toda acción colectiva. Y que se hace utilizando fundamentalmente cambios legales y el apoyo de una buena parte de la judicatura. En esto nada es nuevo, los nazis y los franquistas también utilizaron la retorsión de las leyes para dar una pátina de legitimidad a sus tropelías. Este nuevo fascismo no es el de los correaes, las antorchas. Es postmoderno porque no plantea un modelo acabado de sociedad. Y por eso puede ser aún más tolerable para alguna de las sensibilidades de la derecha, y más útil a los objetivos de imponer un capitalismo autoritario. Al fin y al cabo, entre Berlusconi —con sus políticas (la estatal y la cultural de sus medios)— y Meloni hay más continuidad que una mera alianza circunstancial.

III

Las crisis actuales pueden resolverse de formas diversas. La financiera del 2008, en un reforzamiento de las políticas neoliberales. En la pandemia, con alguna reforma sustancial. Había otro gobierno, y el fiasco de las políticas anteriores ayudó a moderar algunas posiciones. Pero el rebrote de la inflación, los impactos ya visibles de la crisis climática y el clima bélico en torno a las tensiones de EE.UU. con Rusia y China abren otras salidas. Y el problema crucial que tenemos en este momento está en la izquierda: en la debilidad de la acción colectiva y las organizaciones, en su amplio descredito social, en el aislamiento social de gran parte de la población (en gran medida propiciado por un combinado de consumismo, de presión individualista, de carreras profesionales competitivas, de desaliento en los que ya salen derrotados en su juventud...), y en la desaparición de un proyecto alternativo que sirva cuando menos de guía.

Gran parte de esta debilidad es estructural. Refleja el impacto social de la desigualdad de recursos, de sistemas normativos diseñados en beneficio del capital, del marketing formal e informal, del impacto de unos medios de comunicación alienantes. También de la persistencia de viejos posos reaccionarios como los que genera el patriarcado o la tradición racista. Pero la izquierda no puede renunciar a intentar revertir esta situación. Hay aún mucha fuerza social que se enfrenta en mil y un espacios a esta deriva autoritaria y reaccionaria. Pero está bastante

dispersa, metida en sus luchas particulares, en espacios que les resultan relativamente confortables dada la dureza del ambiente exterior, y otra mucha que lo vive de forma mucho más pasiva y a la que hay que tratar de activar. Una activación que requiere un enorme esfuerzo colectivo, generoso, abierto de acciones políticas, de organizaciones sociales, de espacios de reflexión, de encuentros. Para disputar a la reacción la hegemonía cultural, para provocar dinámicas de cambio.

Y, demasiadas veces, parece que el guion de la izquierda lo escribe un reaccionario infiltrado. El caso de Italia es paradigmático; cómo tirar por la ventana en pocos años un patrimonio cultural y político construido con mucho esfuerzo. Cómo aceptar unas reformas políticas totalmente favorables a la reacción. Y cómo, después del desastre, no tener ninguna capacidad de reacción. Aquí las cosas no han sido tan desastrosas. La vieja izquierda, la de Izquierda Unida, la sindical, la vecinal, ha sabido mantener un suelo de organización y resistencia nada despreciable. La nueva izquierda, la que emergió con el 15-M, tuvo la capacidad de generar una dinámica ganadora cuando la coyuntura le fue favorable, pero no consiguió consolidar un proyecto sólido ni eludir la tradición de las disputas partidistas y personales. Tenemos que agradecer todo este esfuerzo de la vieja y la nueva izquierda, y pedirles a todos y todas que sean, seamos, capaces de construir una constelación social y política capaz de, cuando menos, bloquear tanto el ascenso de este fascismo encubierto como de parar el declive de la izquierda. Esto es lo que exigen los tiempos.

Antonio Antón

Identidad, sujeto y hegemonía

En este texto, bajo este título con esos tres conceptos 'Identidad, sujeto y hegemonía', trato las características y la interacción de esos procesos constitutivos de las fuerzas sociopolíticas con una perspectiva progresista o igualitario-emancipadora. Tiene dos partes. La primera es una reflexión más teórica en la que parto del comentario de tres interesantes libros de teoría social con referencias ideológicas más generales para definir la importancia de la ideología y el debate cultural y la necesidad de superar el marxismo y el posmarxismo. La segunda explica un aspecto fundamental de esa conversación: la interacción entre lucha de clases y pugna cultural, o bien, la combinación entre acción sociopolítica y lucha ideológica, en el marco del proceso renovador de la izquierda.

1. En torno a E. P. Thompson, Laclau y Gramsci

En este largo y caluroso verano he leído tres libros excelentes de teoría social. El primero, *Cambio político y movimiento obrero bajo el franquismo. Lucha de clases, dictadura y democracia (1939-1977)*, ed. de 2012, del historiador y exlíder de *Catalunya en Comú Podem*, Xavier Domènech, actual profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, se centra en la formación sociohistórica de la identidad obrera española. El segundo, *Los olvidados. Ficción de un proletariado reaccionario*, del filósofo y profesor de la Universidad de Barcelona, Antonio Gómez Villar, es un análisis crítico de diversas interpretaciones sobre la identidad obrera y el obrerismo. El tercero, editado por otros dos prestigiosos intelectuales, José Luis Villacañas, catedrático de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, y Anxo Garrido, también filósofo, titulado *Efecto Gramsci. De la renovación del marxismo al populismo contemporáneo*, tiene una veintena de aportaciones interesantes, a destacar la del filósofo latinoamericano, de origen argentino y profesor en la UNAM de México, Massimo Modonesi, "Hegemonía como subjetivación política y/o como dirección/dominación".

No voy a glosar los múltiples aspectos valiosos de estos libros y sus autores o los diversos matices y reflexiones que me han sugerido su estudio. Son estimulantes y expresan que la teoría crítica está viva y se hacen esfuerzos intelectuales para interpretar el mundo, las nuevas realidades, y facilitar una orientación transformadora desde una óptica emancipadora-igualitaria. Igualmente, expresan la pluralidad de sensibilidades teóricas e ideológicas en este campo progresista y de izquierdas. Los títulos son suficientemente significativos y definen el marco de sus prioridades analíticas. Su contenido histórico y filosófico entronca con aspectos cruciales de las ciencias sociales, en particular, de la sociología y las ciencias políticas, especialidad desde la que lo valoro.

Dos aspectos son destacables y se entrecruzan en los tres textos: la relación de identidad popular, sujeto sociopolítico y hegemonía político-cultural, y la interacción entre la pugna sociopolítica (o lucha de clases) y la guerra cultural (o lucha ideológica o disputa por el sentido). Las perspectivas teóricas son diversas aunque se excluyen dos corrientes ideológicas, frente a las que se utilizan abundantes y acertados argumentos críticos. Por una parte, el liberalismo o el socioliberalismo, y, por otra parte, el marxismo más economicista y determinista.

Las referencias teóricas más relevantes que enmarcan cada libro son las siguientes. En el primero, E. P. Thompson, que se definía como un humanista y materialista histórico, distanciado del marxismo ortodoxo althusseriano, y que a mi modo de ver supera la dicotomía estructura/superestructura a través de la experiencia relacional de los agentes subalternos y una revalorización de lo común. En el segundo, Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, posmarxistas defensores del populismo de izquierda y la relevancia del discurso en la construcción de la realidad social, aunque en el texto también se valoran los componentes estructurales y las aportaciones thompsonianas sobre el proceso histórico-relacional. Y en el tercero, Antonio Gramsci, el marxista más heterodoxo de entreguerras por la importancia que le da a la hegemonía cultural para la acción política transformadora e influyente en la evolución del eurocomunismo o neolaborismo (del que se reclama deudora la propia vicepresidenta Yolanda Díaz y gran parte de su equipo); desde ese enfoque gramsciano se abre un diálogo, por una parte, con la teoría populista, y, por otra parte, con el republicanismo cívico, del que el propio Villacañas es un experto.

Por tanto, tenemos un campo más acotado, aunque no exento de la influencia de las dos corrientes ideológicas de fondo, dominantes hace medio siglo en las izquierdas, y su duradero conflicto y relativa inconmensurabilidad, o sea, su incapacidad para compararse, comprenderse e interrelacionarse: el marxismo y el posmarxismo, o bien el estructuralismo y el postestructuralismo o, en el plano filosófico, el materialismo y el idealismo; todos ellos con más o menos enfoques dialécticos o funcionalistas y con mezclas diversas. Una reflexión crítica a estos fundamentos doctrinales la he realizado en varios libros, en particular en *Movimiento popular y cambio político. Nuevos discursos* (2015) y en [**Clase, nación y populismo. Pensamiento crítico y estrategias políticas**](#) (2019).

Pues bien, los textos mencionados suponen aproximaciones para superar este bloqueo teórico y discursivo de estas décadas. Tienen un doble valor. Por un lado, de diálogo intelectual con un talante abierto, comprensivo y argumentado, que es de agradecer en el actual contexto de cierto sectarismo corporativo y fanatismo y rigidez de pensamiento; por otro lado, sitúa ese debate teórico en la coyuntura estratégica de los cambios político-sociales progresistas, referenciados principalmente al marco español, europeo y latinoamericano. Como casi siempre, la elaboración teórica progresista va por detrás de la experiencia popular del conflicto sociopolítico y exige, particularmente a las izquierdas y la intelectualidad crítica, una profunda renovación de pensamiento basado en un doble criterio: realismo analítico y voluntad transformadora.

Añado, simplemente, que esta doble dinámica de persistencia de las diferencias, junto con alguna coincidencia, renovación y diálogo entre enfoques marxistas (o estructuralistas) y posmarxistas (o postestructuralistas), se producen en diferentes campos sociopolíticos, en particular en el feminismo, por citar las dos referentes principales de ambas corrientes renovadas, las

estadounidenses Nancy Fraser y Judith Butler, tal como he explicado en el libro [Identidades feministas y teoría crítica](#) (2021).

2. Ni marxista ni posmarxista

Antes de proseguir en esta densa reflexión, me permito contar una anécdota académico-personal, ahora que termino la docencia y causo baja en la Universidad, aunque siga con la investigación social. Lo hago sin pedir permiso a mi interlocutor, aunque espero que sea aceptable para él ya que es ilustrativa del tema que nos ocupa. En una comida informal en la Universidad Autónoma de Madrid, cuando éramos colegas de Facultad, tuve una conversación con Nacho Álvarez, responsable de Economía de *Podemos* y antes de ser miembro del Gobierno de coalición como secretario de Estado de Derechos Sociales.

Era en el marco del acuerdo y la colaboración entre *Izquierda Unida* y *Podemos*, aludiendo a las preferencias ideológicas por el marxismo en el caso de los dirigentes de la primera formación y por el populismo posmarxista en el caso de los de la segunda. Su pregunta fue directa: ¿Cómo me definía yo? Le dije que aunque reconocía aportaciones valiosas en cada una de las dos, no era marxista ni tampoco posmarxista, que no me sentía cómodo en esas etiquetas ideológicas, aunque mantenía grandes coincidencias político-estratégicas; en todo caso, apostaba por una tercera posición teórica y, en tono jocoso, por una actitud post-posmarxista, de superación de ambas y contradictorias corrientes dominantes. Conocía mi trayectoria sociopolítica e intelectual, pero mi respuesta le producía perplejidad. Tuve que echar mano, precisamente, de E. P. Thompson y, en cierta medida, del propio Gramsci como un autor intermedio y ambivalente respecto de esas dos corrientes para identificar la existencia de una corriente teórica diferenciada.

O sea, se trataba de valorar muchas aportaciones de interés de esas dos corrientes (al igual que de otras), pero me afirmaba en un pensamiento con un enfoque que denomino realista (mejor que materialista), crítico (frente al dogmatismo y el subjetivismo), multidimensional (frente a la unilateralidad y la dicotomía estructura/superestructura) e interactivo (relacional y de agencia). Aunque minoritaria en casi todos los ámbitos académicos y políticos, pienso que esta corriente de pensamiento crítico es la más fructífera y conecta con la cultura cívica menos sistematizada de gran parte del activismo sociopolítico y en los movimientos sociales.

Expresa la experiencia de la acción colectiva y el cambio social de parte de mi generación, al menos desde las décadas de los años sesenta y setenta en las que como joven trabajador, de procedencia del humanismo cristiano y con bagaje marxista, tuve una amplia participación en la formación de CC. OO. y el movimiento antifranquista, en un contexto que describe muy bien Xavi Domènech, y siempre desde el compromiso cívico.

Ha llovido mucho en este medio siglo, pero permanecen las grandes corrientes ideológicas alternativas al neoliberalismo, aunque más debilitadas y anquilosadas y plasmadas en eclecticismos y mestizajes diversos, así como con despreocupación teórica generalizada. De ahí la importancia de un impulso renovador que sirva para encarar los retos de este siglo. No es casualidad que en esta década, de protesta social indignada y cambio político, se refuerce la pugna intelectual y, al mismo tiempo, la necesidad de renovación y superación teórica de los esquematismos rígidos de ambas corrientes, hoy a la defensiva respecto de la gran ofensiva ideológica liberal y reaccionaria, convertida en dominante en los grandes aparatos mediáticos.

3. Importancia de la ideología y prioridad a las dinámicas transformadoras

No se trata de buscar una falsa cohesión ideológica en las izquierdas, hoy imposible de conseguir y que, en realidad, nunca se ha producido. Desde la primera mitad del siglo XIX las fuerzas progresistas han estado divididas en el plano ideológico: socialistas utópicos, socialdemócratas reformadores, marxistas, anarquistas, hegelianos e idealistas de izquierda, empiristas... El propio marxismo ha sufrido una gran diversificación y un declive desde los años sesenta, acentuados tras el derrumbe del Este soviético y la crisis del eurocomunismo del Sur de Europa, desde el máximo exponente italiano de fines de los setenta y, por otro lado, por el giro liberal y centrista de la mayoría de la socialdemocracia europea.

Por otra parte, los emergentes nuevos movimientos sociales, aparte de su gran aportación relacional y práctica y reflexiones parciales de interés, también han estado condicionados por esta dispersión e impotencia teórica. Igualmente, la teoría populista, al decir de sus propios promotores, no es estrictamente una ideología, aunque sus presupuestos filosóficos se enmarquen en el postestructuralismo, sino una 'lógica política' de polarización social; su ambigüedad sustantiva es insuficiente para orientar el sentido de los procesos emancipatorios.

Ante las grandes transformaciones socioeconómicas, institucionales, populares y geopolíticas y las nuevas ofensivas ideológicas neoliberales y reaccionarias, el triple pensamiento progresista, socioliberal, marxista y postmoderno, se muestra incapaz de afrontar el reto ideológico de forma convincente. Se necesita una profunda renovación y, al mismo tiempo, superación de los fundamentos teóricos unilaterales. Como en otras esferas, se trata de recoger lo bueno de lo viejo e innovar desde el análisis concreto y la experiencia popular.

Debemos convivir con esa relativa fragmentación y división ideológica, con pérdida de consistencia teórica en las izquierdas y menor credibilidad de la intelectualidad, y abordar las dos dimensiones de su negativo impacto en las dinámicas transformadoras progresistas. Por una parte, de investigación social paciente, rigurosa y objetiva, elaboración de pensamiento crítico, conversación teórica abierta y desprejuiciada, renuncia al dogmatismo y la manipulación sectaria, y superar la tendencia cultural dominante de inmediatez más o menos ecléctico o confrontativo con subordinación al interés de las élites dominantes. Por otra parte, reforzar las iniciativas unitarias en el campo más directo de las estrategias políticas y los procesos orgánicos, sociales y políticos, desde el respeto al pluralismo y con actitud integradora, que orienten la actividad práctica progresista, sobre la que se forjen nuevas identificaciones igualitarias y emancipadoras.

Hay que dejar atrás la idea de una fuerte unidad ideológica y una gran cohesión organizativa de un bloque sociopolítico homogéneo. La experiencia de este último medio siglo y, en particular, de esta última y larga década, aporta muchas enseñanzas en esos tres campos cruciales en los que apunto más bien una actitud de seriedad crítica, voluntad unitaria y flexibilidad articuladora. Supone revalorizar el debate teórico riguroso, priorizar los acuerdos político-estratégicos transformadores y regular el pluralismo político organizativo, todo ello bajo el prisma de un proyecto de país (de Europa y del mundo) más justo y democrático. Estos tres libros, desde su seriedad científica y diversidad ideológica, aportan una saludable profundización y renovación teórica.

4. Lucha de clases y/o pugnas identitarias

En las últimas semanas he escrito varios artículos sobre las clases sociales. En el último, "[La identificación de clase](#)", explicaba que la clase social trabajadora o popular, como sujeto de carácter sociopolítico, como dice el historiador E. P. Thompson, se forma a través de su experiencia relacional en el conflicto socioeconómico, la pugna sociopolítica y la diferenciación cultural respecto de las clases dominantes. En otro artículo, "[Identitarismos](#)", expongo una reflexión sobre el significado y el contexto de los movimientos identitarios y su relación con los procesos igualitarios-emancipadores. Doy un paso más para profundizar en esta relación complementaria y contradictoria entre lucha de clases y/o pugnas identitarias.

Se trata de adoptar una visión más multidimensional del carácter y los conflictos de clase, considerando la existencia de tensiones irreductibles a ese marco o bien tendencias que son transversales o mixtas. En particular, se debe superar la deficiente clasificación, según su composición sociodemográfica, de movimientos o luchas de clase (trabajadora) y movimientos identitarios o parciales (de clase media). Pero, también, según su sentido y sus objetivos: los primeros, de carácter sobre todo económico y supuestamente materialistas o universalistas, y los segundos de carácter cultural y supuestamente posmaterialistas o identitarios. Esas interpretaciones expresan una prolongada pugna por la prevalencia de unas representaciones u otras, así como sobre la hegemonía interpretativa y articuladora de unos agentes y procesos participativos u otros. En resumen, entre la vieja izquierda y la nueva izquierda (o grupos alternativos), entre el supuesto materialismo y el culturalismo (o idealismo).

En todo ello se entrecruzan intereses corporativos de distintas élites asociativas y su prestigio representativo e intelectual. Pero permanece el reto de un enfoque más integrador e interactivo de los distintos procesos y características de la experiencia histórico-relacional del conjunto de capas subalternas y movimientos populares progresistas.

Precisamente, en el libro citado de Xavier Domènech hay una interpretación realista y compleja, en el contexto sobre todo de los años sesenta y setenta, de la interacción de los diversos planos en la formación de la clase obrera española como sujeto sociopolítico, con su doble componente. Por un lado, la activación popular por sus intereses sociolaborales inmediatos con su interrelación con otras características, particularmente territoriales y de género; por otro lado, la acción democrática frente a la dictadura franquista con dinámicas y objetivos más generales con influencias partidarias de diversos conglomerados políticos.

Esa resignificación de las palabras clase y lucha de clases es fundamental para evitar malentendidos y clarificar lo principal, el carácter de la pugna sociopolítica de capas subalternas, con sus procesos de configuración de sus identidades colectivas y su formación como sujetos colectivos con dinámicas transformadoras y democráticas.

Igualmente, hay que clarificar el significado de la llamada guerra cultural, pugna ideológica o disputa por el sentido. En un artículo anterior, "[La pugna cultural y lo común en las izquierdas](#)", señalaba lo paradójico de llamar culturales a los nuevos movimientos sociales como el feminista, el ecologista y el pacifista, así como el antirracista o étnico nacional. Más chocante todavía con la experiencia reciente del feminismo de la cuarta ola, que pone en primer plano la activación feminista frente a la violencia machista y por la igualdad de las mujeres en los ámbitos

sociolaborales y relacionales y su emancipación vital; es decir, que se trata de un asunto bien material de cambiar las relaciones de dominación y el estatus y los estereotipos desventajosos, y superar la desigualdad social y la discriminación en función del sexo/género (incluido los colectivos LGTBI) de impacto personal y grupal y con bases estructurales de poder y privilegios a afrontar.

Igualmente, en el caso ecologista no hace falta insistir en lo central de la propia sostenibilidad y vida en el planeta y sus crisis ecológicas y medioambientales por no hablar de las crisis energéticas, territoriales y alimentarias o las amenazas nucleares. Así mismo, el nuevo pacifismo se tiene que enfrentar a los grandes conflictos geoestratégicos y políticos que con la actual guerra en Ucrania condicionan la paz y la seguridad europea y mundial, por no hablar de los múltiples conflictos en las relaciones internacionales; el reto pacifista va de cultura democrática y valores solidarios, pero es evidente que trata de cuestiones bien materiales y vitales y de conflictos de interés, dominación y hegemonía.

Y similar combinación de problemas y respuestas materiales, de protección social y seguridad convivencial con valores éticos y tradiciones culturales se expresan en los movimientos antirracistas y de solidaridad internacional, o ante la propia diversidad nacional. El reto es una convivencia intercultural y una integración social y cívico-democrática que haga frente a las nuevas dinámicas racistas y autoritarias, de discriminación de sectores inmigrantes con una perspectiva neocolonialista y xenófoba y de no reconocimiento de sus derechos, con la apuesta por la resolución democrática y dialogada de los conflictos.

Por el otro lado, los movimientos sindicales o vecinales, considerados viejos movimientos, expresan nuevas dinámicas, aparte de sus prioridades sociolaborales y habitacionales y urbanísticas, basadas en unas demandas más generales de protección pública, cohesión social, convivencia intercultural y seguridad social con garantías democráticas; podríamos añadir los nuevos retos sobre el desarrollo rural y el equilibrio territorial. Y cobran importancia los componentes subjetivos e identitarios de mayor dignidad popular y sentido de la justicia social y la democracia, aunque con una configuración más interclasista y transversal de las capas populares frente a los poderosos.

Se trata de una renovada cultura democrática progresista y de izquierdas con fuerte contenido de justicia social que contribuye a conformar una cierta identificación cívico-popular diferenciada de los poderosos y las derechas reaccionarias, es decir, a cierta pertenencia colectiva a un bloque sociopolítico o tendencia sociocultural en conflicto con el bloque de poder.

Es lo más parecido a la realidad que expresaba la vieja terminología de la lucha o conflicto de clases. Así, existe una interacción de la acción sociolaboral y económico-distribuidora-protectora con las experiencias e identificaciones en los otros campos sociopolíticos o movimientos sociales que están compartidos por muchas personas subalternas con una intersección experiencial o identidad múltiple y mestiza, de lo que se ha venido a denominar un espacio morado, verde y rojo, con su vertiente territorial y democratizadora.

Hay que superar esa convencional dicotomía de lo cultural, que no es solo lo subjetivo, y lo material, que no debe confundirse solo con lo económico sino que incorpora las relaciones sociales de dominación/subordinación, que son hechos sociales bien materiales que condicionan

los proyectos vitales y la igualdad y la libertad de las personas y grupos sociales.

5. Acción sociopolítica y/o lucha ideológica (o disputa por el sentido)

Los dos componentes, la acción sociopolítica y la actividad ideológica o cultural, son complementarios, pero también pueden estar en conflicto. Van siempre combinados, pero se trata de valorar las prioridades y sus jerarquías en la acción sociopolítica y cultural, en cada contexto. La acción cultural es fundamental, claramente desde Gramsci, aunque ha tenido interpretaciones más culturalistas o más materialistas. La subjetivación o la identificación colectiva son elementos fundamentales para conformar sujetos colectivos transformadores. La dicotomía se establece sobre la prevalencia política y normativa entre la guerra cultural o combate ideológico o, bien, la activación popular con su orientación estratégica y teórica y la organización social.

En ambos casos se incluyen los procesos de conformación de la representación y los liderazgos políticos y sociales que tienen un impacto distinto según los ejes prevalentes de esa acción sociopolítica y en la formación de sujetos colectivos. Y ello hay que valorarlo según el contexto estratégico y particularmente en los dos ámbitos: el movimiento popular y la representación política y social. Dicho en términos metafóricos: entre la ola y el surfista.

Por tanto, la cuestión a dilucidar es la dimensión de la prioridad a la acción comunicativa-discursiva o cultural-ideológica para conformar movimiento popular o espacios sociopolíticos, ampliar los campos electorales y ganar representación político-institucional de las fuerzas progresistas o izquierdas transformadoras.

Doy por descontado la referencia a las dos grandes experiencias de fuerte impulso cívico-popular y articulación de unas representaciones sociopolíticas y élites político-institucionales progresistas o de izquierda. Me refiero, por un lado, al movimiento obrero, popular y antifranquista de los años sesenta y setenta, ya referido con la interpretación histórico-relacional y multidimensional de Xavier Domènech; por otro lado, al proceso del amplio y heterogéneo movimiento popular (con sus precedentes) simbolizado por el movimiento indignado del 15-M, en el periodo 2010/2014, analizado en otros textos, que dio paso a otro ciclo de configuración de un masivo espacio político electoral y una nueva representación política, de la mano de *Podemos* y sus aliados.

Pues bien, estamos ante cierto agotamiento de la experiencia de esta larga década en los dos aspectos fundamentales: el carácter e intensidad de la ola y la articulación político institucional de su representación, el surfista, junto con la incertidumbre sobre la dimensión del campo electoral alternativo que interrelaciona ambos.

Es el marco de preocupación para la renovación y la configuración del llamado frente amplio y el proyecto de *Sumar* de Yolanda Díaz, que habrá que valorar más adelante. Ahora solamente añadido un aspecto general, al calor de este hilo conductor de la interacción entre, por un lado, la acción sociopolítica contando con los factores estructurales e histórico-relacionales de las mayorías populares (la ola) y, por otro lado, la acción discursiva-comunicativa y la gestión representativa e institucional de unas élites políticas progresistas (el surfista).

He explicado en otros textos el gran acierto estratégico de la dirección de *Podemos* en la configuración del nuevo espacio político-electoral, junto con sus confluencias y más tarde con la alianza con *Izquierda Unida*, en ese periodo constitutivo de 2014/2016. No obstante, el marco

estructural, a pesar de las grandes dificultades y límites, presentaba algunas ventajas fundamentales: la existencia de un campo sociopolítico progresista y diferenciado de la socialdemocracia, curtido en la experiencia popular y democrática de todo el lustro anterior.

Aunque la ola, en su gran dimensión movilizadora y expresiva había terminado (luego, a gran escala, solo habrá la cuarta ola feminista, con otras movilizaciones menores), se había formado ya ese campo sociopolítico popular y cívico de seis millones de personas. A esa activación cívica masiva, incluidas las tres huelgas generales y muy variadas movilizaciones y mareas ciudadanas, habían contribuido miles de activistas y grupos sociales de la llamada sociedad civil.

La iniciativa articuladora de *Podemos* consistió, no en crear esa ola o campo sociopolítico crítico, formado en el lustro anterior, sino en ofrecerle un cauce electoral y una representación político institucional adecuados y, por tanto, darle más consistencia política, continuidad como agente sociopolítico y operatividad reformadora.

En ese sentido, la acción discursiva-comunicativa de divulgación de unas ideas clave y un liderazgo representativo y creíble resultaba decisiva. Lo hicieron inicialmente con éxito, a diferencia de la relativa incapacidad de *Izquierda Unida*, que tuvo que renovarse, y el propio *Partido Socialista*, que jugaba entonces en otro campo liberal y prepotente, había sufrido una fuerte desafección popular de más de cuatro millones de electores por su regresiva gestión de la crisis socioeconómica, y hasta su relativa renovación *sanchista* ya en 2018, con la moción de censura frente al Gobierno corrupto de la derecha, que empieza a recuperar una parte de ese espacio.

Como decía, estamos en otra etapa política con unas desventajas claras, comparativamente con la primera mitad de la pasada década. No solo por la fuerza del poder establecido con todos sus mecanismos y poderes (económico, judicial, institucional, mediático) y una contraofensiva político-cultural conservadora y reaccionara y su fuerza legitimadora en los aparatos mediáticos, sino por las propias limitaciones y deficiencias del campo progresista, en particular en sus dos aspectos básicos: la debilidad de su activación cívica, la pérdida de fuelle de la ola, y el debilitamiento y la división interna de las fuerzas del cambio.

Queda un amplio espacio progresista y de izquierda a efectos de cierta identificación popular y legitimidad social de su representación política, pero más dividido y disperso y sin una dinámica de fondo transformadora, ilusionante y participativa. Y persisten distintas formaciones políticas, con variadas experiencias competitivas y colaboradoras, que deben contribuir a la recomposición partidaria, plural y unitaria, en el nuevo proceso renovador.

6. La ola y el surfista

Situar el problema es el primer paso para la solución. Se ha hablado mucho de las dificultades de inserción territorial (y social de base) de las plataformas políticas existentes del espacio del cambio, aunque poco (¡no era su problema!) de la pérdida de dinamismo participativo desde abajo y en los movimientos sociales. Pero la cuestión analítica más importante es la del enfoque sobre las prioridades estratégicas de cómo se fortalece un espacio sociopolítico. Y siempre se ha priorizado en las direcciones partidarias la acción discursiva del liderazgo y, en todo caso, la acción legitimadora derivada de la gestión institucional reformadora en beneficio de la gente.

Esa prevalencia de lo discursivo, en esta etapa más desventajosa para las fuerzas del cambio, se muestra insuficiente. La comunicación propia, en pugna con los aislamientos mediáticos dominantes, es fundamental, y la pugna ideológico-cultural imprescindible. Muchas personas, periodistas, pensadores..., se dedican (nos dedicamos) a ello. Los intelectuales orgánicos, al decir de Gramsci, con su debida autonomía de los aparatos institucionales, son necesarios.

Pero, estamos hablando de las estrategias sociopolíticas de las organizaciones partidarias (y también sociales), con perspectivas transformadoras de progreso. Por tanto, además de la acción comunicativa o ideológica, hay un problema con la ola, con la mejora de la relación de fuerzas sociales o, si se quiere, con mayores capacidades de poder social fruto de la participación democrática de la ciudadanía. Y para ello se necesita más que un buen surfista: una estructura articuladora, con un liderazgo unitario y una estrategia transformadora que aproveche todas las condiciones positivas para ayudar a recomponer la ola cívica, el campo sociopolítico electoral y su representación político-institucional. Es difícil el reconocimiento de las responsabilidades y el aprendizaje a partir de los errores. Algunos aspectos sobre la débil conexión con las bases sociales y el arraigo territorial se van corrigiendo. Pero, al menos, se debe emprender cierta rectificación general sobre las prioridades y los enfoques dirigidos a la activación popular.

Es la tarea que parece que intenta abordar Yolanda Díaz y su equipo: conformar y fortalecer un movimiento ciudadano y articular una nueva plataforma político-electoral. Habrá que volver sobre ello en la medida que se avance en su clarificación. Ahora solo menciono una dificultad general: el peso ideológico de una lectura irrealista de la estrategia alternativa derivada del idealismo discursivo de la teoría populista, que es contraproducente para reajustar las tareas de refuerzo de la ola y el surfista; es decir, el movimiento popular y el campo sociopolítico alternativo, por un lado, y la nueva y unitaria representación política, por otro lado.

Es un error desconsiderar los procesos de formación de la activación popular en torno a sus intereses y demandas sociales, más o menos inmediatas y enlazadas con reivindicaciones más generales, combinadas con un bagaje cultural previo en unas condiciones socio-estructurales e históricas. Es unilateral centrarse casi exclusivamente en la lucha ideológica o la pugna cultural para la constitución de liderazgos y la representación política (surfismo) y menos para la conformación de una corriente popular (la 'construcción del pueblo'). Las dinámicas transformadoras de fondo se basan en una activación cívica prolongada y profunda, o sea en la existencia de procesos de protesta social y articulación asociativa y comunitaria popular (la ola o marea), junto con la participación de la gente más activa o comprometida políticamente que también se va forjando con unos valores solidarios y democráticos. Algunas experiencias latinoamericanas recientes son ilustrativas de ello; el actual marco de la izquierda europea está más estancado (salvando la experiencia francesa) y con riesgos involucionistas reaccionarios.

Quedan algunos ecos históricos, precisamente de la experiencia de la acción antifranquista en España o del eurocomunismo italiano en los setenta, con su articulación de partido de masas con un movimiento popular (sindicatos) fuerte. O, más recientemente, en el comienzo de *Podemos*, con el modelo de partido-movimiento, aunque en este caso sin ponerlo en marcha, ni haber profundizado en su significado y la prioridad de los esfuerzos a dedicar. Además, estaba entrecruzado con una idea irrealista de construcción de un pueblo, cuya configuración autónoma no se explicaba ni valoraba, ya que se conformaría por la acción ideológico-cultural del liderazgo

que es el que le daría sentido; o sea, el discurso construiría esa realidad sociopolítica y lo operativo se concentraba en la máquina electoral y la acción institucional.

Las resistencias al cambio de esquema orientativo siguen siendo fuertes ¿Por qué, qué se ventila?. En el centro del problema está la legitimación de las nuevas élites políticas, reforzadas por su aparente influencia social, su representatividad electoral y su reflejo de capacidad institucional. Su liderazgo acumulaba ventajas relacionales y corporativas, destacando los méritos propios (legítimos) de esa gestión y dirección representativa, pero desconsiderando la valoración de que las causas fundamentales del cambio social y político, de la formación de ese amplio sujeto político, eran la participación colectiva masiva (la ola) de todo un lustro anterior fusionada entonces con un buen surfista, *Podemos* y sus convergencias.

O sea, lo que se produjo fue la absorción de las capacidades colectivas populares en beneficio de una finalidad legitimadora de la nueva representación política que encarnaba unas expectativas de cambio de progreso. Estaba legitimada parcialmente, mejor que la izquierda tradicional, al presentarse de forma creíble como nueva representación de la gente o del pueblo y definir un proyecto transformador necesario.

El problema irresuelto era y es ese vacío de arraigo popular y vertebración de base de las estructuras partidarias que siempre se ha resaltado pero subordinado a las (supuestas) tareas urgentes e importantes: la acción discursiva e institucional por arriba. Cuando la ola se debilita el surfista se queda inerte. Se puede desear y esperar otra oleada general como el proceso del 15-M, pero el presente y el futuro traen sus dinámicas transformadoras específicas a cada etapa y coyuntura; se trata de analizarlas para cambiarlas con una perspectiva progresista o igualitario-emancipadora.

En definitiva, hay que dar más relevancia a vincularse y empujar la ola (o una marea suave), conscientes de ser un actor complementario en procesos más complejos que dependen de diversas circunstancias sociohistóricas, estructurales y político-institucionales que median sobre la realidad social. Supone cambiar de prioridades estratégicas, con talentos más democráticos e inclusivos. El cambio ideológico, para combinar realismo analítico y voluntad transformadora, será relevante para reforzar la nueva representación de la izquierda alternativa y fortalecer las dinámicas transformadoras de progreso.

7. La prevalencia en la formación de sujetos no es la ideología, es la experiencia cívica

Ilustro la prevalencia de la ideológica o la cultura en la formación de las identidades y los sujetos colectivos con varias citas de varios líderes relevantes en el espacio del cambio, las primeras de la época inicial y unitaria de *Podemos* y la última reciente:

«La ideología es el principal campo de batalla político» (2014).

«En la política las posiciones y el terreno no están dados, son el resultado de la disputa por el sentido» (2015).

‘No son los ‘intereses sociales’ los que construyen sujeto político. Son las identidades: los mitos y los relatos y horizontes compartidos’ (2016).

«Ojalá la izquierda entienda que reequilibrar la correlación mediática de fuerzas es condición de posibilidad para avanzar en el combate ideológico que es, en última instancia, la esencia de la política y de la transformación social» (2022).

Antes he asociado estas posiciones de la prevalencia de la acción comunicativa-discursiva con la teoría populista, dominante en la dirección inicial de *Podemos*, es decir, compartidas por el llamado *pablismo* y el *errejonismo*. Doy por supuesto que estas formulaciones ideológicas comunes pueden estar asociadas a posiciones estratégicas distintas por su impacto político. Así, como se sabe, con ese rasgo común afín a un enfoque populista o postestructuralista de sobrevaloración del componente cultural-ideológico hay distintas sensibilidades políticas.

Podemos resumir, en el caso de Íñigo Errejón, una preferencia por la transversalidad y una actitud más moderada; y en el caso de Pablo Iglesias, una posición más confrontativa y de exigencia transformadora. La crisis en *Podemos* tiene que ver con esa diferencia estratégica, precisamente en torno a la actitud adaptativa o crítica ante el pacto continuista del *Partido Socialista* y *Ciudadanos* en 2016, cuando ya había opciones para un gobierno progresista, así como respecto (en contra o a favor) del acuerdo unitario con *Izquierda Unida*. Todo ello con las consiguientes tensiones internas que abocaron a la escisión. Ahora, con la alianza con el *Partido Socialista* que ha girado hacia la izquierda y el Gobierno progresista de coalición no se dan esas grandes diferencias estrategias entre *Unidas Podemos* y *Más País*, aunque se expresen esas distintas inclinaciones en diferentes temas puntuales; es más fácil la convergencia programática y la colaboración política, pendiente de los equilibrios representativos en el nuevo proceso renovador.

Pero aquí destaco los rasgos teóricos compartidos de la prevalencia de la acción discursiva frente a la convencional en los movimientos populares progresistas de la activación cívica de la gente misma, desde la base de sus realidades sociales, sus demandas inmediatas y sus tradiciones culturales.

Para terminar, sintetizo mi valoración, ya tratada en otros textos. La identidad colectiva, en este caso de clase social, como dice Xavier Domènech es ‘el conjunto de tradiciones, creencias y representaciones que conforman a la clase como clase’. Expresan una experiencia relacional, un vínculo colectivo, una relación social, con su correspondiente reconocimiento y pertenencia de la persona o grupo social respecto de los demás grupos sociales, con los que pueden compartir unos intereses, identificaciones y valores, pero que se diferencian de otros.

Las identidades, como la realidad social misma, pueden ser progresistas, conservadoras o neutras; más densas o fluidas e interrelacionadas con otras dimensiones cívicas y universalistas como ser humano; más excluyentes o inclusivas junto con la interseccionalidad entre variadas identificaciones y conformaciones identitarias múltiples o mestizas con expresiones y funcionalidades diversas según las circunstancias. El sentido de pertenencia colectiva no necesariamente coarta al individuo y su libertad individual, puede reforzar su subjetivación y empoderamiento al mismo tiempo que sus vínculos sociales en un proceso colectivo igualitario emancipador. Simplemente expresan una realidad grupal, a valorar según su sentido en su

contexto.

Las identidades colectivas, como explica E. P. Thompson, no son previas al conflicto, a la práctica social, y las que construyen el sujeto. Ellas mismas se crean en ese proceso y lo refuerzan. Los componentes subjetivos, los mitos, relatos u horizontes, son fundamentales para conformar un movimiento popular... en la medida que son compartidos por la gente. Entonces, con esa incorporación, se transforman en fuerza social, en capacidad articuladora y de cambio.

Pero no es la subjetividad, las ideas (por sí solas), en abstracto, las que construyen el sujeto político. Sino que son los actores reales, en su práctica sociopolítica y de conflicto, en los que se encarnan determinada cultura ética y proyectos colectivos y en un contexto concreto, los que se convierten en sujetos políticos y transforman la realidad. La mente y el cuerpo están interpenetrados en el ser humano. Y, sobre todo, el hecho social es relacional.

Así, esas citas sobre la construcción del sujeto político, sin esta precisión, denotarían una sobrevaloración de la capacidad articuladora del discurso, de las ideas transmitidas por una élite, en la construcción del pueblo. La consecuencia es que se infravalora el devenir relacional de la gente, de sus condiciones materiales, su experiencia y su cultura; el sujeto no se puede disociar (solo analíticamente) de su posición social, sus vínculos y su identidad colectiva.

Es la gente concreta, sus diferentes capas con su práctica social, quien articula su comportamiento sociopolítico para cambiar la realidad. Y lo hace, precisamente, desde una interpretación y valoración de su situación social de subordinación o desigualdad, con un relato o un juicio ético, que le da sentido transformador. Es la experiencia humana de unas relaciones sociales, vivida, percibida e interpretada desde una cultura y unos valores, y teniendo en cuenta sus capacidades asociativas, la que permite a los sectores populares articular un comportamiento y una identificación con los que se configura como sujeto social o político. Su estatus, su comportamiento y su identidad están interrelacionados mutuamente.

El Rombo

Kakademia, I

I

Podía haber sido

un gran profesor

en Oxford

o en Harvard.

Aquí

solo veían

un tipo anómalo,

maniático,

y no disculpaban

sus rarezas,

como ignorar

educadamente

a los descerebrados

aunque entre ellos

estuvieran

sus colegas.

Amigo, ante todo,

de la verdad

fue

para muy pocos

el verdadero maestro

que hubiera debido ser

para muchos.

II

La mujer
con forma de croqueta
pidiome consejo.

Díselo,
siguiolo,
triunfó,
y aquí está
mi mano sangrante
por su mordisco.

III

El excelso
ecologista,
poeta,
profesor
y animalista
a su gata en celo
masturbaba
con un lápiz.

IV

IN MEMORIAM

Negro era el cuello
de su camisa;
negros los puños

y las uñas.

Pero arrimose
al futuro gran hombre
pequeñito
pero muy televisado.

Se arrimó tanto
que le quitó la mujer
con su consentimiento.

Ella lavó la mugre
de sus camisas
regularmente,
según creo.

Y debió enseñarle
a lustrar
sus zapatos
antes que le dejara.

Ahora viste correctamente,
habla poco,
peina canas,
muy digno
aspirante eterno
a juez constitucional.

Pere Ortega

La OTAN, la seguridad energética y la nueva guerra fría

El hostigamiento de Estados Unidos y la OTAN a Rusia aproximándose a sus fronteras y rompiendo los acuerdos ABM e INF sobre armamento nuclear que comprometía a ambas potencias a no instalar misiles balísticos ni baterías de antimisiles en Europa, propiciaron la invasión —condenable— de Ucrania por parte de Rusia, despertando un belicismo de nefastas consecuencias para Europa y el mundo. La prueba más evidente de ello ha sido la Cumbre de la OTAN de Madrid los días 28 y 29 de junio pasado, donde se ha dado entrada a dos países históricamente neutrales, Finlandia y Suecia, que habían servido de ejemplo para una Europa no alineada con los afanes belicistas tanto de EE UU como de la extinta URSS. Una Cumbre, donde, además, se ha aprobado un nuevo Concepto Estratégico que anuncia un incremento del belicismo con la creación de una fuerza de intervención rápida de 300.000 efectivos, un mayor armamentismo y un aumento vertiginoso del gasto militar que conduce a Europa y el mundo a una nueva guerra fría.

El nuevo [Concepto Estratégico \(CE\)](#) aprobado en Madrid, enumera cuáles son las principales amenazas y peligros a los que los países miembros de la OTAN deben hacer frente. En primer lugar, se señala a Rusia como la principal amenaza directa para todo el mundo occidental, país que, tras su ataque en Ucrania, se convierte en el principal enemigo de la OTAN, algo que desde el final de la Guerra Fría no aparecía en los CE anteriores. Tras Rusia, aparecen como novedad las ambiciones de China, a quién señalan como un peligro desestabilizador para los países occidentales. Una mención falaz, pues en política exterior no se conoce ninguna actuación de China con el ánimo de desestabilizar a ningún país, cosa que no se puede decir de EE UU y Rusia, que sí lo han hecho en numerosas ocasiones. Se trata de un CE que vaticina unas relaciones internacionales divididas en dos bloques: el Occidental dirigido por EE UU con el brazo armado de la OTAN, y el de China y Rusia junto a sus países aliados, lo que posibilita una nueva guerra fría.

Después se señalan otras amenazas y peligros que ya aparecían en anteriores CE: la seguridad energética; los ataques en el ciberespacio a infraestructuras críticas; el uso de diferentes armas de destrucción masiva (químicas, biológicas, radiológicas o nucleares), señalando a Irán, Corea del Norte, Siria y Rusia; los conflictos de África y Oriente Medio, señalando el Sahel como foco de actuación de grupos yihadistas; y el terrorismo que interconectado con estados fallidos es una amenaza global. Por último, se señala el cambio climático, que junto a cuestiones demográficas, las emergencias sanitarias debido a pandemias y la inseguridad alimentaria, es un multiplicador de conflictos que inevitablemente derivaran en tráfico de personas y migraciones masivas e irregulares que afectaran a los países miembros de la OTAN.

Empero, la gran novedad del CE se produce cuando se señala la energía como motivo de planificación operacional para su protección. Es evidente que la OTAN está señalando que las necesidades crecientes de energía pueden ser desencadenantes de conflictos en los cuales esta organización se verá obligada a llevar a cabo intervenciones militares. Con la mención de la seguridad energética, con referencia al petróleo y el gas, es evidente que se está advirtiendo de

que la creciente escasez de las energías fósiles las convierte en un recurso estratégico para el sistema político y económico que es común de los países miembros, y el preámbulo del Tratado de la OTAN señala que su objetivo es defender el sistema de vida que les es común a sus países miembro. Se trata de unas energías fósiles que, por otra parte, son la causa principal de las emisiones de CO₂e a la atmósfera y por consiguiente causantes del cambio climático que, por otro lado, la misma OTAN señala como desencadenante de conflictos.

A las cuestiones derivadas de la seguridad energética, se incluye como una amenaza para la seguridad de sus miembros el proteger las redes de suministro, que incluyen las instalaciones de distribución de gas y petróleo, tanto por tubería como por barco, como su almacenamiento y tratamiento. A la vez que se incluye la elevación artificial de los precios de las energías fósiles u otras materias primas. Estas nuevas medidas hay que enclavarlas entre las denominadas como amenazas “no bélicas” o “híbridas” de las nuevas guerras alejadas de las guerras “convencionales”. Por tanto, hay que entender que la interrupción del suministro por gaseoductos, tuberías de petróleo, buques que los transporten, un boicot energético o elevar los precios de los hidrocarburos de manera artificial podría ser incluido como un “ataque híbrido” y podría invocarse el artículo 5 del Tratado. En ese sentido, el CE señala de manera explícita que deben estar preparados para disuadir y defenderse frente al uso coercitivo de tácticas políticas, económicas, energéticas, informativas y otras tácticas híbridas por parte de Estados y actores no estatales, acciones que pasan a considerarse como ataque armado. Es decir, obligar a todos los Estados miembros a dar una respuesta armada. Sin duda, se trata de una ampliación del campo de batalla de la OTAN hacia esas zonas grises donde se sitúan los ataques cibernéticos.

En otro ámbito, el nuevo CE señala al cambio climático como provocador de migraciones y que estas pueden ser utilizadas por fuerzas hostiles como un elemento para desestabilizar a los países receptores. Esto, dicho por un organismo militar, es tanto como decir que se debe actuar militarmente para impedir las pues representan una amenaza a la seguridad y que, por tanto, se deben impedir y si es necesario reprimir.

Por último, y como se viene repitiendo hasta la saciedad por los dirigentes de la Casa Blanca, se señala la exigencia de aumentar el gasto militar en defensa de todos los países miembros de la OTAN para garantizar los compromisos adoptados en este nuevo CE.

El nuevo Concepto Estratégico anuncia el retroceso hacia una Europa y un mundo dividido en dos bloques enfrentados que aboga por el aumento de los presupuestos de defensa para adquirir más capacidades militares, lo que irremediamente conducirá a una carrera de armamento, incluidas las nucleares y donde sin duda aparecerán nuevos conflictos que provocarán enfrentamientos armados. Un mundo bipolar que tira por tierra todo el esfuerzo de la gente que ha estado trabajando por una Europa que fuera la Casa Común de todos los pueblos europeos. Un mundo multilateral donde los conflictos se abordaran desde la negociación política en un marco de concertación y de seguridad compartida, alejados del militarismo que subyace en el *Si vis pacem para bellum* que ahora se pretende de nuevo instaurar.

[Fuente: [El Salto](#)]

Rafael Poch de Feliu

Un fracaso militar y un entierro

El tiempo aclarará el alcance del fracaso militar ruso en la región de Járkov, escenario de una exitosa contraofensiva ucraniana. El complejo atlantista la presenta como un gran éxito e incluso como posible fin del lento pero mantenido avance ruso. Mucho más discretos se muestran los militares de Estados Unidos directamente responsables del asunto. Por su parte, en algunos medios de la izquierda del Sur global se ignora olímpicamente lo que sugieren los compungidos rostros que han ido apareciendo estos días en la tele rusa. Se dice, por ejemplo que los ucranianos, “han ocupado áreas de las que rusos tenía previsto retirarse”. Todo va bien.

Quienes presenciaron las acciones del ejército ruso en la primera guerra chechena, o en los inicios de la guerra de Afganistán, no pueden sorprenderse del nivel de desastre, incompetencia y desbarajuste del que son capaces las fuerzas armadas rusas. En la historia militar rusa las enormes cantidades de entrega y heroísmo van de la mano con el desastre y el desbarajuste, pero en las agresiones, allí donde el oso ruso ataca sin haber sido previa y directamente atacado, lo segundo suele dominar ampliamente sobre lo primero.

Los fracasos de la “operación militar especial” rusa sirven para demostrar la utilidad del extraordinario flujo de armas y dinero para el corrupto régimen ucraniano orientada hacia la eternización del conflicto en Ucrania, definido sin disimulo alguno por la embajadora de Estados Unidos en Kíev, Marie Yovanovich, como “el campo de batalla de la competición entre grandes potencias”. Pero todo eso es secundario para situar en su gran contexto la espantada/retirada/derrota, sea cual sea la descripción más adecuada, presenciada en la región de Járkov.

A menor escala, lo que se está viendo en Ucrania es muy parecido a las maravillas militares que Occidente, y especialmente Estados Unidos, nos viene regalando desde hace mucho tiempo. [Como recuerda Andrew Bacevich](#), el ejército de Estados Unidos, que lo hace todo tan bien, dispone de la más avanzada tecnología para matar, y consume un presupuesto por lo menos catorce veces superior al ruso, ha sido incapaz de ganar sus propias guerras. Ahí podemos remontarnos hasta Corea y Vietnam. “Y eso cuando, Rusia solo lleva seis meses empantanada en Ucrania, mientras que Estados Unidos lo estuvo veinte años en Afganistán y todavía tiene tropas en Irak dos décadas después de la desastrosa invasión de aquel país”.

¿A qué se debe el desbarajuste político-militar de Estados Unidos que además de producir millones de muertos, decenas de millones de desplazados y refugiados, completa destrucción de ciudades enteras, etc., etc., tuvo por resultado estimular fenómenos como el del Estado Islámico y el avance de la influencia de su adversario iraní en Irak?

Al hablar del fracaso militar ruso en Járkov y analizar sus motivos con la habitual arrogancia, demostramos no haber aprendido nada del loco belicismo occidental de los últimos años, dice con buen criterio Bacevich.

El entierro de Gorbachov

Ningún político alemán asistió al entierro de Gorbachov el 3 de septiembre en Moscú. El Gorbachov que fue el artífice de la apertura del muro de Berlín y de la reunificación alemana, no ha merecido ni siquiera ese gesto.

Acudir al entierro habría recordado que hace no tanto, los dos países negociaron asuntos de gran trascendencia para el continente. Habría sido también un guiño a los sectores de la sociedad rusa a los que la Unión Europea está criminalizando colectivamente por la acción de su gobierno, con las sanciones, restricción de visados, censura cultural y prohibición de visitas. Es la prueba definitiva de que Alemania renuncia a la diplomacia.

La ex canciller Angela Merkel, esa vulgar y rutinaria administradora de lo que había, que los medios de comunicación convirtieron en [la gran estadista de Europa](#), alegó un “problema de rodilla” para no acudir. Los demás ni siquiera ofrecieron excusa. Verdadera hoja de parra de toda una vergüenza nacional. Sin Gorbachov es muy posible que aún estuviéramos en aquella “República de Bonn”, aquella Alemania que queríamos tanto que nos encantaba que hubiera dos, como se decía.

Es obvio que Alemania y Francia juntas, podrían reconducir ahora la situación en Europa, fuera del dictado de Estados Unidos, pero no hay voluntad. Macron no pasa de la impotente gesticulación. Un “europeísta” tan reputado como Wolfgang Schäuble, el “Doctor Strangelove” del castigo a Grecia, propone ideas tan peregrinas como [incluir a Polonia en el destartado puente de mando franco-alemán Análisis](#). El voluntarioso esfuerzo de [Ursula von der Leyen](#) y de la necia, belicista y arrogante ministra de exteriores Annalena Baerbock por enviar armas y más armas al régimen ucraniano, a fin de eternizar la guerra y con ello el sufrimiento de la población civil, en Ucrania, en Rusia y en la propia Europa, precisa una consulta al psicoanalista.

En la rusofobia de los medios de comunicación alemanes y de su clase política postreunificación, ¿no hay ecos revanchistas por los abuelos derrotados en Stalingrado? ¿Cómo explicar sino su entusiasmo por perjudicar sus propios intereses subordinándolos a los demenciales planes de Estados Unidos de echarle un pulso a China, su primer socio comercial, que comienza con Rusia en Ucrania?

Tampoco asistió Putin al entierro. Se limitó a inclinarse ante el féretro en el hospital con un ramo de rosas rojas y a persignarse. La ausencia de un verdadero funeral de Estado es coherente con el hecho de que el actual régimen ruso no sea resultado de Gorbachov, sino de lo que lo derribó. Gorbachov fue la antítesis de lo que representa para Rusia la invasión de Ucrania,

Respecto a España, la ignorancia de la izquierda sobre lo que era la URSS y la simpleza de atribuir a Gorbachov la responsabilidad de la disolución del superestado que tan bien nos venía como contrapeso global, ha producido comentarios negativos muy cortos sobre la personalidad del [gran ruso universal que minusvaloró al imperialismo](#). Por ahí pocas sorpresas.

[Fuente: [Ctxf](#)]

Rafael Poch de Feliu

La guerra se extiende

Con la próxima anexión a Rusia de los distritos ucranianos de Jersón, Zaporozhie y los territorios del Donbás, y con la movilización parcial decretada, el Kremlin lanza una señal inequívoca: “ante una amenaza existencial, no tenemos nada que perder y no vamos a ceder”.

Que Ucrania, a la que la OTAN quiere convertir en una temible potencia militar directamente enfocada contra Rusia, constituya una “amenaza existencial” para Rusia es discutible. De lo que no hay duda es que para el régimen ruso perder la actual guerra es perderse irremisiblemente. Una cuestión de vida o muerte para Putin. Y cuando Putin dice que para evitarlo “utilizaremos, sin duda, todos los medios de que disponemos” y que “esto no es un bluff”, hay que tomárselo en serio. Porque la opción de tomarse a broma una amenaza nuclear no existe.

Durante las crisis de la guerra fría la discusión sobre si las amenazas de usar el arma nuclear (“todos los medios de que disponemos”) eran farol o no, no tenía cabida: siempre se tomaba muy en serio. Así se evitó el desastre.

Independientemente del juicio que tengamos sobre esta guerra, hay algo en lo que debemos estar de acuerdo: avanzar infraestructuras militares, misiles incluidos, junto a las fronteras de una superpotencia nuclear es una provocación. Y eso es lo que se ha venido haciendo en Europa desde hace años. Los políticos occidentales prefieren jugar a la ruleta rusa en una situación en la que geográficamente Ucrania juega el papel de Cuba en 1962.

La anexión de esas regiones ucranianas a Rusia significa que lo que el Kremlin denomina “operación militar especial” pasa a ser una guerra. Una guerra en territorio ruso. Eso significa dos cosas. Que aumentará la intensidad de la campaña, que hasta ahora ha sido muy comedida de parte rusa. No ha habido destrucción de infraestructuras fundamentales, ni misiles contra los centros de poder en Kiev, que es lo primero que se hizo en Belgrado y Bagdad. Seguramente ahora se atacarán objetivos hasta ahora preservados. Pero sobre todo se concreta la amenaza nuclear, pues una guerra en Rusia, según la doctrina rusa permite utilizar armas de último recurso para defender la integridad del país. Pronto, para Rusia, el sureste de Ucrania formará parte de la Federación Rusa, así que por quimérico que parezca, el mensaje es inequívoco.

La “movilización parcial” decretada por el Kremlin incrementará la carne de cañón para una guerra que tiene un frente de mil kilómetros, cuya fragilidad ha evidenciado la ofensiva ucraniana en Járkov. Emigrantes del entorno soviético atraídos por la promesa de papeles y gente pobre en general necesitada de dinero, acudirán a la llamada, tal como ocurre en el ejército de Estados Unidos. Por ahí nada extraordinario. Respecto a los reservistas rusos y juventud en general, muchos de lo que pueden optarían por marcharse del país. Lamentablemente nuestros genios en Bruselas impiden esa estampida de sentido común, con su estúpida política de restricción de visados que en algunos países es prohibición total a rusos, lo que confirma que hay en marcha un castigo colectivo contra la población rusa, cuyo entusiasmo por combatir es mínimo.

A la despolitizada y pragmáticamente conformista sociedad rusa, que consiente la autocracia a cambio de estabilidad, se le va a pedir sacrificios, patriótica movilización y economía de guerra.

Eso quiere decir que se rompe el contrato social entre poder y sociedad que ha funcionado en Rusia los últimos años. Ese contrato decía: "Tú haces lo que te dé la gana, siempre y cuando no nos devuelvas a los desastres de los años noventa". Ahora, si el Kremlin quiere sobrevivir a esa ruptura deberá formular un nuevo contrato con la sociedad, compensando a los de abajo.

Si el Kremlin no propicia un cambio y no sale del actual esquema socioeconómico al servicio de una minoría privilegiada, si, además de más autoritario, no se hace más "social", la represión no bastará para encauzar el descontento de la población.

Según cifras oficiales la guerra ya ha producido 6000 muertos, sin contar las unidades "Wagner" ni las milicias del Donbás. La cifra real puede ser, por tanto, el doble. ¿En nombre de qué esa sangría?

La movilización parcial y la anexión es respuesta a los más de 60.000 millones en ayuda occidental a Ucrania (equivalente al presupuesto militar ruso) y a la implicación militar directa de la OTAN en la guerra, con armas, cuadros, inteligencia, ataques a territorio ruso y atentados en Moscú y en las zonas ocupadas de Ucrania. Una escalada se enrosca en la otra. ¿Hasta cuando tanta insensatez?

[Fuente: [Ctxt](#)]

Agustín Moreno

Sin impuestos no hay servicios públicos

En los años veinte del siglo pasado, Al Capone era el rey del hampa en Chicago y estaba en la lista de los más buscados del FBI. Ecurridizo como una anguila a la acción de la justicia, su caída se produjo en los años treinta cuando fue condenado a 11 años de prisión por un jurado popular por el delito de evasión de impuestos. Fue enviado a la prisión de Alcatraz donde murió. Este hecho indica dos cosas: la paradoja de que fueran los impuestos y no los crímenes los que acabasen con él; y la importancia que se da a la fiscalidad en los países anglosajones. Por algo Walt Kowalski, ese obrero del automóvil y veterano de guerra que protagoniza Clint Eastwood en *Gran Torino*, cuando se confiesa a un sacerdote antes de sacrificarse dice: «No pagar impuestos es lo mismo que robar».

La política fiscal en las sociedades modernas es aquella imposición sobre la renta, el patrimonio, los beneficios y el consumo, entre otros, con la finalidad de redistribuir la riqueza, financiar los servicios públicos y las inversiones del Estado. Es el Estado con los impuestos quien garantiza los derechos sociales y de ciudadanía como la salud, la educación, las pensiones, los servicios sociales, el transporte público, la participación política, etc.

La fiscalidad tiene que cumplir dos principios para que sea justa y eficaz: progresividad y suficiencia. Es decir, que pague más quien más tiene y que recaude lo necesario para afrontar todos los gastos que tiene un Estado. Lo dice la propia Constitución española y es la forma de financiar el Estado social que define en su artículo uno. Pero en España, la capacidad de recaudación y la progresividad son pequeñas. La presión fiscal en nuestro país (35,4%) es más baja que la media de la zona euro (41,6%), según datos de Eurostat. Si hablamos de progresividad han bajado los impuestos sobre los beneficios empresariales y han aumentado sobre las rentas de trabajo y el consumo: [el impuesto de sociedades se ha reducido un 40,59% en quince años, mientras ha crecido el IRPF un 30,27% y el IVA un 29,79%](#). Y del fraude y la evasión fiscal de los ricos mejor no hablar para no explotar de indignación.

Impuestos y servicios públicos están indisolublemente unidos hasta el punto de que sin los primeros no existirían los segundos ni lo que conocemos como el Welfare State. Esto que parece de sentido común, lo viene cuestionando la derecha de manera frontal. Es parte de la guerra cultural para cambiar los valores democráticos. La oligarquía aborrece lo público y quiere menos Estado. El neoliberalismo ha roto la baraja y defiende el círculo perverso de bajar impuestos, reducir los servicios públicos y privatizarlos. Los que quieren bajar los impuestos se los quieren bajar sobre todo a los ricos, aunque para ello te reduzcan la pensión, te quiten la sanidad y la escuela pública, y dejen sin igualdad de oportunidades a tus hijos. Es una carga de profundidad contra nuestros derechos y debilita la democracia porque la desigualdad reduce la libertad.

Como es muy duro decir claramente que la sanidad debe ser un negocio privado y que debe ser mejor para los más ricos que para los pobres, la derecha tiene que hacer piruetas dialécticas para que no se noten sus intenciones. Tienen que disimular. La jungla neoliberal necesita para imponerse de una gran fábrica de persuasión, lo que David Harvey llama la construcción del consentimiento. Aquí juegan un papel fundamental los medios de comunicación y todos los

púlpitos disponibles para el manejo de las emociones. De otra manera, no podría entenderse cómo amplios sectores de la población son capaces de votar en contra de sus intereses sin estar locos.

La estrategia de la derecha para dinamitar una fiscalidad justa es decir que son injustos todos los impuestos. Y no es así. Como dice uno de los mayores expertos en la materia, [Juan Francisco Martín Seco](#), «lo cierto es que hay margen dentro de la imposición directa, incluso y con mayor razón en los momentos de crisis, para aumentarla, por ejemplo, en lo referente a las rentas de capital. Si en la sociedad española hay muchas personas muy necesitadas, incluso en situación de pobreza, existen también otros muchos ciudadanos con rentas elevadas y con capacidad tributaria. Hay pobres, pero también ricos, aunque estos últimos no se tengan por tales y se consideren a sí mismos rentas medias». Esto que es rechazado por las derechas, tiene [el apoyo de un 70% de la ciudadanía](#) que está a favor de un impuesto a las grandes fortunas, la banca y las eléctricas.

La izquierda debe tener tan claro que hay una operación de desmontaje del Estado social, como las políticas necesarias para blindarlo y defenderlo. Lo urgente no debe impedir reclamar lo importante. Se trata de reivindicar el bienestar social de la ciudadanía y no la simple subsistencia, en el marco de la sostenibilidad del planeta. No es aceptable que se financien con fondos públicos los conciertos privados de educación, sanidad y dependencia con el dinero de todos y conviertan lo público en un servicio de beneficencia para los más pobres retornando al atraso social.

El Estado debe proteger a la ciudadanía frente al infortunio, la desregulación y los poderosos. A éstos, no les importa que la sociedad se divida en ricos y en pobres, aunque éstos les molestan y no quieren verlos. Luchar contra las desigualdades y la injusticia social no es otra cosa que defender la democracia. Sin un Estado que la proteja, la ciudadanía quedaría a merced de todo tipo de bandas, lleven o no corbata. La «libertad» de la «pandillera» Ayuso es la de las bandas de poderosos, ¿o no es lo que está haciendo con la privatización de la sanidad, la educación y la barra libre a la «uberización» frente al taxi?

El curso político que empieza es un año cargado de elecciones. Las derechas aumentarán su agresividad para recuperar el poder en el Estado y para mantenerlo donde lo tienen. Escucharemos hasta la extenuación la cantinela de que hay que bajar los impuestos a todos, aunque estén pensando en las grandes empresas y fortunas y poner en cuestión la sostenibilidad de los servicios públicos para privatizarlos. Hay que recordar, por ejemplo, que [la Comunidad de Madrid deja de recaudar 4.111 millones cada año por los regalos fiscales a los ricos](#). Por ello, es una obscenidad que «vendan» que no hay recursos para la Atención Primaria, para reducir las listas de espera, para construir los centros públicos educativos, para contratar profesorado y reducir las ratios de alumnado, para desamiantar los colegios, para mejorar el transporte público, etc.

El extremismo neoliberal de Feijóo y Ayuso defiende privilegios, es contrario a la mayoría social y está a la derecha del sentido común. Están proponiendo un modelo de país inmoral que dejaría a la intemperie a millones de personas utilizando la libertad como el disfraz de la barbarie. A espabilar toca, porque como dice Ursula K. Le Guin «cualquier poder humano puede ser resistido y cambiado por seres humanos».

[Fuente: [Público](#)]

Paula López Caballero

Debates para un antirracismo radical

En una conversación casual entre conocidos se hablaba de los problemas de desigualdad en México y, rápidamente, una invitada explicó cómo aun proviniendo de «sectores populares», se había beneficiado del «privilegio blanco»: su color de piel le había ayudado a ascender en la escala económica y era consciente de que esta opción no estaba abierta a las mayorías «morenas», o sea, en su perspectiva, a los sectores excluidos de nuestro país. Dicha exclusión, seguía mi interlocutora, se debía a la opresión colonial de México, al mestizaje y al proyecto homogeneizador del Estado que han intentado invisibilizar prácticas racistas y discriminatorias. Por eso para ella era importante hablar de color de piel y así evitar ser cómplice de ese borramiento.

Es emocionante —hasta esperanzador— que cada vez se denuncie más el racismo, la exclusión y la desigualdad; más aún cuando lo hacen voces provenientes de colectivos sociales históricamente marginados como los pueblos indígenas. Ello es mérito de numerosos intelectuales, académicos y líderes sociales que han puesto sobre la mesa problemas que se decían superados o que eran directamente negados — como el racismo o la falta de representación de colectivos minorizados — incluso al interior de los propios movimientos de izquierda. Pero estas agendas, tal y como tienden a formularse en México, también resultan desconcertantes. No porque estos problemas no existan o no sean centrales en la desigualdad, sino por su ubicuidad en el espectro político.

En efecto, la crispación que tiende a dominar sobre estos temas en las redes sociales puede hacer pensar que esas agendas encabezan, *per se*, un programa emancipatorio de transformación radical para las mayorías. Impresión que puede verse reforzada dado que el «objeto» de dichas denuncias es la exclusión sistemática de lenguas, prácticas y cuerpos de sectores subalternos. Y sin embargo, en sus formulaciones más recurrentes, es difícil encontrar en ellas un posicionamiento de izquierda explícito y claro. No me refiero a una etiqueta partidista sino a un programa abiertamente político, preocupado por la redistribución de la riqueza, la transformación de las estructuras de explotación, el freno o límite a una economía de mercado como rectora fundamental de la vida social y la emancipación de los más amplios sectores marginados.

La ausencia de una adhesión manifiesta a este horizonte político ha permitido que estas agendas puedan popularizarse en medios muy diversos; pero también ha provocado que su potencial subversivo se vea aminorado, al grado que pueden ser defendidas desde posturas más liberales e incluso desde aquellas que se enuncian como «no-políticas», reduciendo así su capacidad transformadora. El filósofo Olúfémi O. Taiwó ha denunciado esta dinámica, que él llama «captura de élite» (*elite capture*), [aquí](#). ¿Por qué sucede esto? Y sobre todo, puesto que la moneda parece estar en el aire, ¿cómo profundizar en estas demandas para constituir las, sin ambigüedad, en agendas de izquierda? En plena era de la posverdad y de las sentencias-en-un-tuit, apuesto aquí por una confrontación de ideas respetuosa en donde el desacuerdo no provoque invalidación sino que pueda constituirse en una oportunidad de construir.

La política folk, el castillo de vampiros y el reconocimiento afirmativo

En los últimos años, la coyuntura mundial que explotó con el movimiento BLM fue aprovechada benéficamente en México para poner en primer plano las denuncias contra el racismo y las demandas por reconocimiento e inclusión de colectivos sociales, cuerpos, lenguas y prácticas que no se identifican como parte de la norma dominante. Sin embargo, tal vez por un sentido estratégico o simplemente de manera involuntaria, esta ola mundial nos llegó sin los ricos cuestionamientos que los mismos militantes o intelectuales antirracistas o de izquierda le han dirigido a estas denuncias en otros contextos, algunos desde hace casi treinta años (ejemplos de estos debates se encuentran [aquí](#), [aquí](#) y [aquí](#)). Por lo mismo, muchas de sus críticas siguen siendo válidas para reflexionar sobre las agendas actuales en México, y probablemente también en otros contextos latinoamericanos.

Muchas de estas agendas, aun cuando buscan atajar problemas estructurales, tienden a enunciarse desde «lo local, lo espontáneo o personal, lo horizontal y lo antiestatal». Esta forma de posicionarse en el escenario político es lo que Srnicek y Williams (2017) llaman «política folk». La política folk no es una postura explícita o un reclamo concreto sino un sentido común, una «tendencia implícita» presente en movimientos tan diversos como el consumo ético, algunos movimientos antirracistas, Occupy, las zonas autónomas temporales, el horizontalismo del EZLN, entre otros. Este sentido común apuesta por las experiencias personales o los actos espontáneos o por cambios en la «forma de vida». La política folk también prefiere que la toma de decisiones sea asunto de cada individuo y no de líderes o representantes, a quienes se les ve con suspicacia. Y, finalmente, dado que el trabajo está orientado principalmente a las prácticas individuales, no se aspira a interpelar a las instancias estatales, vistas como inherentemente autoritarias y verticales, sin distinción alguna entre épocas, escalas, contextos, etc.

Por eso, para la política folk resulta congruente plantear estrategias de aparente «retiro», ya sea respecto del Estado o del capitalismo. Se trata, en suma, de opciones individuales que buscan incidir en el mundo social por la vía de adoptar una postura moralmente «alternativa». Piénsese así en la idea de «hacer comunidad» para paliar los efectos de la economía de mercado (comprando con comercio justo o creando redes locales de solidaridad), o en el ejemplo con que inicié, donde verbalizar el color de piel en una reunión se plantea como un acto en sí mismo emancipatorio o disruptivo.

Si bien estas alternativas locales, cotidianas, individuales y morales pueden ser instigadoras de cambios sociales, pueden también mantener afinidades electivas con la economía del mercado y el estado neoliberal, cuya función social cada vez se reduce más. Si acaso estas acciones pudieron ser contestatarias frente a estados totalizadores e intervencionistas, ¿lo siguen siendo hoy, que la diversidad es casi un concepto mercantil y en donde el propio proyecto hegemónico se ha construido sobre la segmentación social y el abandono de todo tipo de demanda socioeconómica transversal? Por todo ello, a pesar de su impulso transformador y de los logros puntuales que puedan alcanzar a nivel local, concluyen Srnicek y Williams, la «política folk» no puede entenderse como un desafío al capitalismo neoliberal ni al orden hegemónico.

La intimidad que pueden compartir estas agendas con el orden neoliberal fue diseccionada en [un brillante texto](#) escrito por el crítico y anarcosindicalista británico Mark Fischer hace casi diez años. Con británica ironía, Fisher describe lo que llama el «castillo de vampiros»: una

«configuración libidinal-discursiva», burguesa y liberal, que se apropia de la energía de las luchas contra el racismo, el machismo, el heterosexismo, hasta hacer parecer que atacarlo a él es atacar a las luchas mismas.

Para vaciar de su potencial disruptivo a estas luchas, el castillo de vampiros insiste, en primer lugar, en que no podemos entendernos a menos que pertenezcamos al mismo grupo identitario, en el cual debemos vivir en vez de luchar por que todos estén libres de la necesidad de usar dichas clasificaciones. En segundo lugar, lejos de popularizar una posición de izquierda, el castillo de vampiros busca instituir una «posición de superioridad elitista en la que a la superioridad de clase se le agrega una superioridad moral». Y finalmente, en lugar de abonar a la tarea de articular la clase, la raza y el género, el castillo de vampiros sospecha de toda mención a la clase como factor explicativo, dando como resultado «justamente, la desarticulación de la clase respecto de las otras categorías». En Estados Unidos, incluso, introducir la desigualdad de clase al debate antirracista [ha sido denunciado](#) como «reduccionismo de clase». Así, tanto en la Gran Bretaña de hace una década como en las denuncias actuales en México, la simple mención de la clase es leída como un intento por degradar o quitarle fuerza a la variable raza o a la variable género.

Con este afilado diagnóstico, la conclusión solo puede ser categórica: las agendas identitarias o antirracistas, sin una profunda y explícita articulación con la clase, terminan transformando un problema social en una etiqueta más de consumo, gracias a su fácil asimilación al mercado, a su moralismo desmovilizador y a su supuesta interseccionalidad que no lo es pues en la práctica evacúa a la clase del panorama. Tal vez por eso puede haber programas en cadenas multinacionales de *streaming*, columnas en periódicos transnacionales claramente alineados con la derecha y el mercado y actores de estatus —y salarios— internacionales abordando el tema.

Habrá quien responda que esta difusión de las agendas antirracistas y a favor del reconocimiento de colectivos invisibilizados es de celebrarse. Y yo coincido. La importancia de estos logros no está en duda. La pregunta es si estas deben ser las metas. Me parece que hay en esto una confusión entre el medio —visibilizar cuerpos, prácticas, lenguas históricamente oprimidas— y el fin (combatir la desigualdad y la explotación para construir estructuras sociales más justas e igualitarias).

Esta confusión puede ir aclarándose con las propuestas de Nancy Fraser, sintetizadas en su debate con Judith Butler ocurrido hace ya casi treinta años (1995). Para Fraser, el límite de las demandas por reconocimiento que han dominado las agendas feministas, identitarias y antirracistas de Estados Unidos desde finales del siglo XX es que son «afirmativas»; esto es, que su estrategia pasa por reafirmar —e incluso reificar— las diferencias o singularidades de los colectivos que buscan ser reconocidos. El «reconocimiento afirmativo», como ella le llama, tiende a presentar a los colectivos sociales como homogéneos y armoniosos y como inherentemente alternativos. Por eso mismo son representaciones que reactivan lenguajes de pureza y autenticidad que no solo no corresponden con realidades más complejas y diversas sino que favorecen el exotismo y la esencialización.

Ejemplos de estas simplificaciones abundan en las redes y medios de comunicación al hablar de los pueblos indígenas o de los afrodescendientes. Ello abre una interesante paradoja, pues es común que los criterios y perímetros que definen a dichos colectivos se hayan establecido desde

la hegemonía. Así, incluso para intelectuales indígenas y líderes sociales, los pueblos indígenas siguen asociados al origen, a lo no-moderno, a aquello que resiste al paso del tiempo y es diferente. Ante lo cual cabe preguntarse si es posible emanciparse recurriendo a categorías y criterios promovidos por el orden hegemónico. ¿En qué medida reificar esos valores, lejos de confrontar al orden establecido, contribuye a consolidarlo?

Fraser sugiere en cambio orientar la lucha hacia lo que ella llama un «reconocimiento transformador», más difícil de alcanzar pero con mayores posibilidades de trastocar el orden establecido. Este tipo de reconocimiento no pasa por visibilizar la existencia solidificada de colectivos sino que busca desmontar las jerarquías mismas que se han fijado entre ellos. Su apuesta última sería una sociedad en la que «se generen libremente construcciones de identidad y diferencia y tras ello se deconstruyan» sin sedimentarlas en identidades congeladas, lo cual solo sería posible sobre la base de una sociedad globalmente igualitaria (que no homogénea). Dicho de otro modo, la aspiración es que la pertenencia o identificación con colectivos reificados no sean condición para acceder a mayores recursos o reconocimiento.

Así, ya no se trataría únicamente de «reconocer» la singularidad de la experiencia propia de los afroamericanos o de los pueblos indígenas para otorgarles recursos. Se trata más bien de apostar por desvanecer la diferenciación de grupo que originó la necesidad de reconocer a estos colectivos y que mantiene a quienes son así identificados en la marginalidad y la exclusión. Ese desdibujamiento pasaría, para Fraser, por atajar de manera directa y contundente las desigualdades de clase: más impuestos a la riqueza, más inversión pública en educación y salud, más espacios para la toma de decisiones, alternativas reales a la economía de mercado, etc.

Ciertamente, la inclusión de actores de piel morena en producciones comerciales o de autores indígenas en medios de comunicación hegemónicos será siempre necesaria. Pero no puede asimilarse a un programa político que busque la reestructuración profunda de las relaciones de opresión y desigualdad. Estas relaciones dominantes convivirán en paz con el «reconocimiento afirmativo», hasta se alimentarán de él, mientras no incluyan planteamientos explícitos en relación al capitalismo y la redistribución de la riqueza.

De la desigualdad a la redistribución

Un diagnóstico rápido de la realidad y de la vida cotidiana de las mayorías en nuestro país sigue siendo devastador: la violencia ligada al narcotráfico y el crimen organizado, los abismos en términos de desigualdad socioeconómica (ampliados por la pandemia), la degradación de las condiciones de trabajo, la precariedad de los jóvenes, la mínima movilidad social. Todo ello da lugar a relaciones sociales cargadas de tensión, sin empatía ni una mínima solidaridad social.

En periodos de crisis como este, concentrarse en cambios morales como lo hace la política folk o promover el reconocimiento de colectivos reificados y muchas veces enfrentados entre sí, sin detenerse a considerar los efectos de clase, puede resultar atractivo como una manera de protesta social. Estas agendas han ganado espacios y batallas al situar estos problemas al centro del debate público y al visibilizar a ciertos colectivos minorizados en los medios de comunicación y las redes sociales. Nada las obliga a cambiar de ruta. Pero sería interesante que el diálogo con las coyunturas globales generara también un posicionamiento por parte de quienes reivindican estas agendas en México y otros contextos latinoamericanos respecto de aquellos comentarios críticos que han circulado en otros países.

Tal vez, si se compartiera una preocupación por la emancipación de las mayorías, las agendas a favor del reconocimiento y las agendas antirracistas podrían articular más explícitamente la importancia de alimentar alianzas entre sectores subalternos más allá de sus identificaciones socioculturales, plantear una interseccionalidad real que otorgue a la clase un valor explicativo o formular demandas orientadas a aminorar la desigualdad de clase interpelando al Estado y no renunciando a él. En suma, y a riesgo de perder popularidad en los medios, imaginar un programa de izquierda que no se contente con enunciar la desigualdad sino que avance en demandar redistribución. Solo así, haciendo explícito un horizonte político vasto y ambicioso, estas agendas pueden volverse realmente estratégicas en la exigencia de una transformación más estructural. Esto es, dejar claro que las demandas por mayor visibilidad y reconocimiento son el *medio* para alcanzar algo más, y no el *fin* de la lucha y la transformación social.

[Fuente: [Jacobinlat](#)]

Ana Almirón Mengíbar y Juan Blanco López

¿Feminismo hegemónico o lobby político-académico prohibicionista?

Asistimos a un agrio debate feminista sobre sexo, género y sexualidad como placer y/o peligro para las mujeres, en el ámbito político y en el seno de un gobierno de coalición autodenominado “el gobierno más progresista y feminista de nuestra historia”, cuyas discrepancias al respecto han llevado al bloqueo parlamentario de los sucesivos proyectos legislativos del Ministerio de Igualdad, desde la llamada Ley Trans hasta la Ley Abolicionista socialista, cuyo pase a trámite en el Congreso ha requerido los votos del PP al romperse el bloque de quienes daban soporte a dicho gobierno de coalición.

El debate está encabezado por conocidas políticas feministas, liderado e iluminado también por un sector de la academia que, en nombre del verdadero pensamiento feminista, se ha atribuido la facultad de establecer de qué se puede o no se puede hablar, qué cuerpos y qué derechos son o no realmente feministas, prohibiendo, ninguneando o condenando como peligroso antifeminismo al servicio del “lobby proxeneta” a quienes, no compartiendo sus postulados, se atreven a no cerrar debates, exigir el derecho a ser escuchadas y a hacer otras propuestas que no sean sólo las de ir engordando el Código Penal con cada nuevo proyecto legislativo.

Los términos de dicho debate han venido mediatizados por ese feminismo político/académico en el poder, trasladando a la opinión pública una versión unilateral, simplificada y polarizada del mismo que enfrentaría a abolicionistas y no abolicionistas, dividiendo y generando una crisis sin precedentes del movimiento feminista, lo que auguraba una más que controvertida y desmovilizada respuesta feminista este último 8M. Y sin embargo no fue así. Pese a emerger de la pandemia, la respuesta feminista volvió a llenar masivamente las calles, luciendo toda su diversidad y pluralidad reivindicativa, llamando la atención la presencia de nuevas generaciones cada vez más jóvenes. Las movilizaciones en cada sitio y sus convocatorias, con sus carteles, pancartas y eslóganes, no eran ajenas a ese debate, pero no desde luego con la misma polarización y representación social que la que ha trascendido mediáticamente, como explica el artículo “8M: Feminismo diverso, plural y mayoritariamente inclusivo” (Almirón et al. 2022) del Área de Feminismos de la APDHA.

Esa falta de concordancia pensamos que hace necesario ir de forma más precisa a los términos del debate, aparentemente novedoso y que, sin embargo, no lo es, como se señala en [“Feminismos y sexualidad: Placer y peligro, versus libertad y censura. De los debates feministas \(inacabados\) de fin de siglo, a los de hoy”](#) (Almirón, 2020), preguntándonos cuáles serían las novedades, quiénes las expresan, dónde y en qué contexto, precisando con el análisis de los datos qué representación real tienen los presupuestos de ese feminismo político/académico supuestamente hegemónico, especificando dónde sería hegemónico, cómo, cuándo y porqué, ya que, obviamente, no se puede ni se debe confundir hegemonía de cualquier tipo con supremacismo. Y, finalmente, cabría preguntarse a dónde y con quien nos lleva ese feminismo, en un momento de claro ataque a los derechos feministas, a los de aborto y reproducción y a los de todas las disidencias sexuales, aquí en Europa (batalla ultraconservadora contra la “ideología de género”), en EE UU (eliminando la garantía constitucional del aborto y cuestionando los

derechos Lgtbiq+) o en Latinoamérica (condenando a las mujeres a penas de 50 años de cárcel por aborto, [como destacan ya algunos medios](#)).

¿Feminismo hegemónico?

Pensamos que convendría precisar qué representación real tienen los postulados de ese feminismo político/académico supuestamente hegemónico, especificando dónde sería hegemónico, cómo, cuándo y porqué, ya que creemos necesario, por una parte, no confundir el plano de la hegemonía política con el de la hegemonía social y, por otra, aclarar lo que serían aspectos hegemónicos de los directamente supremacistas de un feminismo que, aun siendo minoritario, instrumentalizara determinados resortes del poder para imponer sus posicionamientos.

En anteriores trabajos (Almirón, 2020), hemos hecho referencia al feminismo institucional, refiriéndonos especialmente a la corriente mayoritaria encabezada por el PSOE, pero también por otras fuerzas políticas como el PCE o IU, que han ido articulando una serie de redes de grupos en torno a las instituciones, fundamentalmente en torno a los Institutos de la Mujer en los distintos niveles territoriales. Hablábamos así de un feminismo socialdemócrata-liberal fuertemente institucionalizado, políticamente hegemónico. Pero lo cierto es que los cambios en ese ámbito son evidentes y esa hegemonía también ha ido variando en la medida que su poder político también ha ido siendo menor a nivel estatal, especialmente durante los periodos de gobiernos de derechas, primero Aznar y luego Rajoy, así como en los gobiernos autonómicos, especialmente en Andalucía. Socialmente también tenían antes mayores vínculos, gracias a dichas redes y, aunque no hegemonizara el sector más activo y contestatario del movimiento feminista, sí tenía una cierta capacidad de movilización social, al menos en algunos temas, como el de la violencia de género, el 8M o el día del Orgullo Gay.

Pero al gobernar el PP durante largos periodos, el PSOE perdió bastante control institucional de todo ello y sus vínculos sociales son actualmente menores o más débiles en general, aunque obviamente las situaciones varían por comunidades, grandes o pequeñas ciudades, etcétera, requiriendo análisis más concretos. Además, su vuelta a gobernar ha tenido que ser en coalición con Unidas Podemos, cediéndoles el Ministerio de Igualdad para disgusto de Carmen Calvo, que trata de imponer su hegemonía feminista-abolicionista, diferenciándose de Unidas Podemos, desde la Comisión de Igualdad del Congreso y [pese a haber pedido su cese un importante grupo de colectivos](#) y desde su propio partido, agrupando a sus más afines colaboradoras políticas y académicas, aquellas que iniciaron los estudios de la mujer abriéndose un importante espacio propio de poder político y académico.

Sigue habiendo un feminismo políticamente hegemónico que, como el feminismo cultural de los 80, ha vuelto a coger la bandera de acabar con el trabajo sexual femenino y la pornografía, prohibiendo una y cuestionando la otra. Un feminismo hegemónico pero con el poder político que actualmente tienen, en minoría parlamentaria, por lo que, tras tener que retirar la mayoría de artículos referentes a la prostitución si querían aprobar la [Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual](#), han tenido que recurrir a los votos del PP, rompiendo el bloque que apoya el gobierno de coalición, para poder sacar a trámite la Ley Abolicionista prometida en el Congreso del PSOE, gracias al trabajo de Carmen Calvo y sus más afines colaboradoras. Muy reveladora fue esa votación: la ley pasó a trámite con los votos del PSOE, de Unidas Podemos sin los de los

Comunes catalanes y con los del PP. Así que esa *hegemonía política feminista abolicionista* es hoy la que es: minoritaria si no suma los votos del PP, siendo rehén de los mismos, visibilizando la acentuación de sus rasgos más neoliberales, conservadores y prohibicionistas.

Más problemático aún que conseguir la hegemonía política en torno a sus posiciones feministas, pensamos que sería conseguir la hegemonía social en torno a las mismas. Como decíamos, perder el control del feminismo institucionalizado diluye sus vínculos con el tejido social a través de las redes grupales que anteriormente se movían a su alrededor, reduciendo llamativamente su capacidad de movilización. Las [movilizaciones del pasado 8M](#) resultan muy reveladoras al respecto.

En primer lugar, porque, mientras en el ámbito político y en el seno del gobierno de coalición, el debate sobre la prostitución y la ley trans generaban un clima mediático de división y exclusión feminista, en las movilizaciones predominó un feminismo mayoritariamente inclusivo, capaz de llegar a acuerdos y movilizar a miles de personas, entusiasmando a las más jóvenes, como se ha explicado (Almirón et al. 2022) desde el Área de Feminismos de la APDHA. En segundo lugar, porque dichas movilizaciones mostraron la pluralidad y diversidad de los feminismos existentes, fruto del trabajo de años con una marcada perspectiva interseccional y a favor de la libertad sexual (Almirón, 2022), apoyando la regularización de las personas migrantes, a las trabajadoras del hogar y los cuidados que reclamaban la ratificación del Convenio 189 de la OIT, a jóvenes, maestras, sanitarias, limpiadoras, así como a lesbianas, gais, trans, bisexuales, trabajadoras del sexo, hombres por la igualdad, etc., aumentando la participación de todo tipo de colectivos con sus respectivas reivindicaciones en las manifestaciones de todo el país.

Los feminismos actuales hace años que ya no miran sólo el “techo de cristal a romper” que tanto motiva a un sector de feministas, las mejor situadas, sino que cada vez mira más los “suelos pegajosos” que otras tienen que limpiar en condiciones bastante más precarias. Una perspectiva interseccional con mayor sensibilidad social y conocimiento de la realidad, escasamente elaborada ideológica y políticamente por el feminismo oficial, que sigue hablando de “las mujeres” como un todo homogéneo, o de “la mujer trabajadora” obviando que “la clase obrera” está atravesada por muchos otros ejes de desigualdad, explotación y exclusión. Todo ella limita, obviamente, no solo su capacidad de movilización sino la de poder perfilar propuestas que den soluciones a los problemas reales de la gente, en vez de las sólitas declaraciones de intenciones generales basadas en principios filosófico/ideológicos en abstracto, como sería, en nuestra opinión, la de exigir la “abolición de la prostitución” por ley y no como un proceso en el que la escucha de las propias trabajadoras, de sus propuestas y reivindicaciones en relación a la Ley de Extranjería, la Reforma Laboral, etc., fuera haciendo retroceder los condicionantes sociales, económicos y políticos que han ido configurando su existencia a lo largo de los siglos hasta hoy, poniendo por delante los derechos a las prohibiciones, que [solo les llevan a la clandestinidad](#) y aumentan su estigma (Área Feminismos APDHA 2021).

La falta de correspondencia entre hegemonía política y social, agrupando a grandes mayorías sociales en torno a sus posicionamientos, también se puso de relieve al constatarse que las que se supone que tienen mayoría política y proclaman que el “feminismo solo puede ser abolicionista” no sumaban más de una docena de personas en algunas plazas si convocaban solas, excluyendo no solo a las trabajadoras sexuales sino también a las trans; mientras que el “feminismo es para todas, todas”, “ayer, hoy y siempre, por un feminismo inclusivo” o “todos los

derechos, todos los días, para todas las mujeres”, congregaba a miles de mujeres y a muchos hombres, organizados o no en grupos de hombres por la igualdad.

Hay más datos, como los de la [Encuesta del Gabinete de Estudios Sociales y de Opinión Pública \(GESOP\)](#), que muestran, por ejemplo, que el 67% de la población española estaría a favor de regular la prostitución para no llevar a la clandestinidad a quienes la ejercen, con todo lo que eso implica. Otros muestran que no se puede equiparar prostitución con trata porque [los datos no apuntan a que el 90/95% de quienes ejercen la prostitución sean víctimas de trata](#). Y otros señalan, incluso, que [convendría hablar con mayor precisión y rigurosidad al respecto](#), empezando por la propia definición de los conceptos de trata, tráfico y prostitución. En esta dirección, instando a la rigurosidad y a la precisión de los conceptos, y con los datos e información de la que se dispone, irían no pocos trabajos académicos, como los desarrollados a lo largo de los años por Ruth Mestre (2021) o Esther Pomares (2020).

No se puede, ni se debería, sostener un punto de vista político feminista sobre la base de los propios prejuicios ideológicos, sino que convendría conocer mejor la realidad y escuchar a las protagonistas, reconociéndoles el derecho a tener derechos, pudiendo elegir ellas mismas en libertad por cuáles de ellos empezar. Y, por tanto, no debemos confundir cierta hegemonía política con hegemonía social, ni mucho menos con el supremacismo que, aun siendo minoritario, atribuyéndose una representación esencial, única y verdadera, trata de imponer a toda costa sus presupuestos ideológicos y sus propios intereses, instrumentalizando los recursos disponibles desde el poder.

Por todo ello, más que de un feminismo hegemónico, que ni política ni socialmente puede considerarse hegemónico, como se ha explicado, más bien parece que deberíamos hablar en la actualidad de un *lobby* feminista político-académico atrincherado en los espacios de poder que aún mantiene, cuyos planteamientos, concebidos como pensamiento feminista único, negador de la pluralidad de feminismos existentes, le llevan cada vez más hacia postulados supremacistas, muy conservadores, que está dispuesto a imponer aunque requiera hacerlo con los votos del PP (tal y como hemos visto con la Ley Abolicionista en un contexto, además, de ofensiva de la extrema derecha que condiciona la agenda política a su guerra contra la “ideología de género”, haciendo casa común con ella y rompiendo el consenso sobre la pluralidad de posicionamientos feministas en estos temas). Todo lo cual acarrea, a corto plazo, graves consecuencias para los colectivos más precarios y estigmatizados, como las trabajadoras del sexo que, de aprobarse la llamada Ley Abolicionista, verían endurecerse sus condiciones de trabajo y peligrar aún más su seguridad, cuando lo que vienen reivindicando es todo lo contrario: ser trabajadoras del sexo con derechos (Acién, Aldeide, Arjona y García, 2022) y no clandestinas (Barrera, 2019), para poder ir acabando con su estigmatización (Clemente, 2020).

Finalmente, parece necesario plantearse a dónde (Barrère, M. 2020) y con quiénes nos lleva ese feminismo, a partir de una serie de preguntas que están en los debates de muchos colectivos feministas en estos últimos años (Barrère, M, 2020):

¿A dónde nos lleva un feminismo con un sujeto feminista excluyente en el que no quepamos todas, todos y *todes*? ¿A dónde nos lleva un feminismo que parece haberse quedado atrapado en el peligro de la sexualidad para las mujeres y que intenta acaparar la legitimidad de su discurso amordazando a quienes no coinciden con sus postulados?

¿A dónde nos lleva un feminismo al que solo le preocupe romper su propio techo de cristal dejando de lado a las más pobres, necesitadas, estigmatizadas y discriminadas?

¿A dónde nos lleva un feminismo que, al no querer reconocer a las trabajadoras del sexo, ni escuchar las demandas sobre sus condiciones de trabajo, las excluyó de cualquier ayuda durante la pandemia?

¿A dónde nos lleva un feminismo que no combate la violencia contra todas, todos y *todes*?

¿A dónde nos lleva un feminismo que legislando sin escuchar es incapaz de perfilar propuestas como las planteadas en el manifiesto [Voces feministas por los derechos](#), apoyado por trabajadoras del sexo y otros sectores académicos y sociales, ni de llegar a acuerdos realmente progresistas y feministas desde los que poder solucionar los problemas reales y concretos que ahí se plantean?

Como decíamos, a corto plazo, la existencia de ese *lobby* político-académico con esos planteamientos ideológicos (sujeto feminista excluyente, acento en el peligro de la sexualidad, prohibicionismo/punitivismo creciente y negación de la pluralidad de feminismos; tan “filosófica” como unilateralmente fundamentados, poco documentados y mucho menos actualizados en las últimas décadas; sin ser hoy ni política ni socialmente hegemónico pero atrincherado en los aparatos partidistas y otros espacios de poder que aún mantiene) puede influir y de hecho lo está haciendo, llevando a acuerdos con las posiciones más conservadoras, en un nuevo contexto de ataque a los derechos de aborto y reproducción y a los de todas las disidencias sexuales, apelando precisamente a la batalla contra la “ideología de género” que viene sosteniendo la extrema derecha de este país. Ciertamente, la continuidad de esos acuerdos tendría serias consecuencias para los colectivos más precarios y estigmatizados, como las trabajadoras sexuales, que, de aprobarse la Ley Abolicionista, verían endurecerse sus condiciones de trabajo y peligrar aún más su seguridad. No obstante, pensamos que tiene interés señalar sus debilidades y que no lo tienen fácil. Ni políticamente, porque son minoría en un tablero político especialmente complejo, ni socialmente, porque esa batalla no la tienen ni mucho menos ganada y no se libra en el corto, sino en el medio y largo plazo.

Todas las batallas que han librado los feminismos de este país en los últimos casi 50 años de lucha por los derechos, reproductivos y al aborto, de todas las disidencias sexuales y de género por la libertad sexual, han sido y siguen siendo batallas de largo recorrido, política y socialmente a contracorriente. Es por tanto imprescindible, ante tanta arrogancia, esgrimir un baño de argumentos, desde la pluralidad e interdisciplinaridad académica y el compromiso social con las más precarias y estigmatizadas, como se ha venido y se sigue haciendo hoy. Ante tanta prepotencia, se hace necesario un baño de realidad desde el activismo feminista proderechos y la rigurosidad académica, visibilizando la diversidad y pluralidad de feminismos realmente existentes: en las calles, de las que cada vez más se han ido apropiado estos colectivos, pero también en el ámbito universitario, en los medios y redes sociales de los que hoy se dispone,

tratando de incidir en la opinión pública general. Ante tanto elitismo, se hace imprescindible un baño de modestia y sensibilidad social, proximidad y empatía, porque la batalla por la igualdad y la libertad sexual no puede ganarse desde la supremacía de nadie, sino desde un análisis de la realidad social que, asumiendo el concepto de interseccionalidad, nos muestra que no hay víctimas puras y absolutas de la opresión (Collins, 1990), rompiendo dicho esquema dicotómico, totalizador y excluyente que genera incertidumbre, y también aporta nuevas herramientas de análisis, investigación y acción (Rodó-Zárate, 2021) con las que poder continuar, por justicia feminista, no negando, prohibiendo, ni censurando esas diferencias, opresiones y privilegios, sino reconociéndolas sin miedo y abordando con valentía su complejidad y sus implicaciones.

[Fuente: [El Salto](#)]

Clara Serra

Un feminismo para desactivar la reacción

Tal vez sea el momento de formular una crítica radical que libere a la teoría feminista de la obligación de construir una base única o constante. [...] La identidad del sujeto feminista no debería ser la base de la política feminista.

Judith Butler, *El género en disputa*

La estructura impone sus coerciones a los dos términos de la relación de dominación, y por consiguiente a los propios dominadores, que pueden beneficiarse de ella sin dejar de ser, de acuerdo con la frase de Marx, «dominados por su dominación».

Pierre Bourdieu, *La dominación masculina*

El avance del feminismo en los últimos tiempos es uno de los acontecimientos políticos y sociales más notorios y con efectos de mayor alcance para los proyectos de izquierdas. Al compás de importantes movilizaciones de mujeres que han tenido lugar estos años en diversos países, el feminismo ha ido calando en la vida social, llegando a sus espacios más cotidianos y produciendo un movimiento tectónico del sentido común.

La hegemonía del feminismo se ha evidenciado en su capacidad para salir de la academia, de los libros y las charlas de expertas, de los espacios más militantes o de las organizaciones políticas, en definitiva, en su potencia para devenir algo popular. Muchas más mujeres, desde nuestras abuelas hasta las adolescentes de la generación del trap, saben que el feminismo tiene que ver con ellas. Al mismo tiempo, al compás de esta expansión acelerada del alcance del feminismo, se hace cada vez más presente la pregunta acerca de su sujeto, de dónde están sus límites, de si es preciso resguardar sus fronteras. El feminismo se ha vuelto hegemónico pero, al mismo tiempo, se hacen cada vez más evidentes las tensiones que a ciertos feminismos les supone aceptar un proyecto para el 99%, un «feminismo para todo el mundo».

Algunos debates actuales —como el que se da entre una parte del feminismo y las demandas de derechos de las personas trans— evidencian fracturas ideológicas profundas y constatan una vuelta al esencialismo por parte de ciertas corrientes feministas. Esta inercia conservadora forma parte de una foto más amplia, de un repliegue identitario generalizado, de una apuesta por las identidades fuertes y bien delimitadas, una lógica que está recorriendo nuestras luchas políticas y movimientos sociales. Los sujetos políticos reivindican su especificidad hasta el solipsismo y se multiplican las diferencias esenciales, metafísicas e insalvables que nos vuelven irremediabilmente extraños unos de otros.

La asignación de nuestras causas políticas a determinados sujetos supuestamente esenciales y naturales, la asunción de que las reivindicaciones les pertenecen en exclusiva a unos —con

autoridad para ejercer de legítimos propietarios de las mismas y denegar la entrada a los *otros*—, es contraria al proceso de mestizaje y de multiplicación de alianzas en el que consiste la construcción de un proyecto colectivo de mayorías radicalmente transformador.

El feminismo, inmerso también en estas lógicas identitarias, es hoy, por tanto, el ambivalente escenario de dos inercias diferentes y contrarias. Existe un feminismo con voluntad de integrar a *lxs otrxs* y con potencial, por lo tanto, para devenir una de las luchas políticas y sociales más poderosas y transformadoras del siglo veintiuno. Como existe, también, un feminismo sumergido en una inercia excluyente y contrarrevolucionaria que avanza hacia un movimiento centripeto de contracción política. Esta ambivalencia representa una encrucijada y, por lo mucho que depende de ella, no se puede no tomar partido.

En la apuesta sobre qué feminismo defendamos se pone en juego la potencia de uno de los principales frentes de lucha para las izquierdas en nuestro momento histórico actual; nos arriesgamos al posible retraining del feminismo, a su vuelta al estatuto de causa particular y subalterna que solo interpela o convoca a una parte de la sociedad.

Lxs otrxs llaman a la puerta... ¿les vamos a dejar entrar?

Como afirma Wendy Brown, «la deconstrucción del sujeto provoca un evidente pánico en el feminismo» y en el debate sobre la cuestión trans se pone de relieve hasta qué punto algunos feminismos condicionan la viabilidad misma de todo proyecto político feminista a una clarísima delimitación de su sujeto y a una nítida y unívoca definición de lo que son «las mujeres». La vuelta de ciertos discursos actuales a la biología como criterio para patrullar las fronteras del sujeto político es síntoma de un retroceso esencialista.

Lo cierto es que venimos de décadas en las que la teoría feminista, desde diferentes perspectivas, sometió a análisis crítico la noción de «mujer» para evidenciar su construcción social —«no se nace mujer, se llega a serlo», en palabras de Beauvoir— y, por tanto, su carácter profundamente político. Incluso Celia Amorós, teórica de referencia para muchas de las feministas más beligerantes con las leyes trans en el contexto español, afirmaba: «hay que reconocerle a Butler que la dialéctica construcción-deconstrucción de la categoría “mujeres” plantea sin duda problemas [y que] ello debería llevarnos a asumir el carácter siempre revisable de la definición de la categoría y su problematicidad».

Ahora bien, más allá de que, en efecto, una mirada no esencialista deba renunciar a la pretensión de tener una delimitación definitiva de ese concepto, la cuestión de los límites del feminismo —y, por tanto, su capacidad de convertirse en una lucha del 99%— no se resuelve solo con la ampliación del sujeto mujer. Por supuesto, frente a las versiones más excluyentes, puede tener potencia política afirmar que «las mujeres trans son mujeres», pero eso no debería servir para volver a poner en marcha una lógica excluyente que nos haga incapaces de integrar a esa pluralidad de sujetos que van a seguir llamando a la puerta.

El encuentro de la cuestión trans con el feminismo nos plantea preguntas mucho más profundas sobre nuestra capacidad para renunciar, como propone Butler, a un sujeto identitario. Porque, ¿acaso no son todas las personas trans parte del sujeto del feminismo? ¿Dejará el feminismo fuera de su sujeto político a los hombres trans? ¿Va el feminismo a condicionar el derecho de acceso de las personas trans —muchas de las cuales no se adscriben a una categoría identitaria

de género ni como hombres ni como mujeres— a su identificación en términos de género? ¿Exigirá carnets de identidad (de género) como condición para ser parte de esta revolución? En definitiva, ¿es que acaso el feminismo es una lucha solo de y para las mujeres?

En nuestro contexto actual, la cuestión trans es una de las costuras por donde surge la pregunta acerca del sujeto del feminismo y se tensan las contradicciones de un feminismo identitario pero, evidentemente, otra de esas costuras está hoy abriéndose con la pregunta en torno a los hombres. Y esta pregunta se vuelve políticamente relevante no solo porque hoy son muchos los hombres que se ven ante ella, sino porque es un interrogante que algunas fuerzas políticas están respondiendo en clave reaccionaria.

Las nuevas extremas derechas están reclutando un ejército de hombres enfadados contra el feminismo, al que se describe como un proyecto excluyente que ha declarado la guerra a la mitad de la sociedad. Conviene no subestimar que esa interpelación, aunque maniquea y tramposa, está siendo preocupantemente exitosa; uno de los rasgos más característicos del voto a las nuevas extremas derechas es su altísima masculinización (los hombres son, por ejemplo, el 76% del electorado de Vox). La pregunta, por tanto, es qué feminismos nos ponen en condiciones de comprender este panorama y combatir estas inercias. ¿Son las nuevas derechas, en gran parte, una reacción a las demandas de igualdad de las mujeres? ¿Explican estos años de avances feministas la violencia con la que se ha levantado la reacción?

Para abordar estas preguntas necesitamos salir del identitarismo en el que están encalladas algunas perspectivas feministas. Bajo los marcos de un feminismo que siempre esté a la defensiva con el desdibujamiento de su sujeto identitario —es decir, de las mujeres—, las cuestiones relativas a la masculinidad suelen ser entendidas como un asunto que nos es ajeno y que le compete por completo a otros. Ese desentendimiento, defendido a menudo como una victoria, es, en realidad, una gran renuncia. Supone abandonar un problema social que justamente el feminismo está en condiciones de pensar con lucidez y de abordar eficazmente.

La tentación de una mirada esencialista implica, incluso, naturalizar la reacción masculina, darla por descontada, no necesitar siquiera explicarla, convertirla en un hecho inevitable. Y así podríamos acabar preguntándonos, con satisfacción: ¿Hasta qué punto no son todos esos hombres que votan a Vox la consecuencia automática del hecho de que los estamos destronando? *Ladran, luego cabalgamos*. La reacción masculina a la que asistimos en nuestros días, así, podría incluso acabar siendo una prueba de lo mucho que estamos avanzando.

Sin embargo, este tipo de perspectivas son peligrosamente acrílicas y cierran la puerta a la posibilidad de plantearnos otros interrogantes: ¿Qué les pasa hoy a los hombres? ¿Qué malestares masculinos está politizando la extrema derecha? ¿Qué cosas no estamos nombrando? ¿Cómo podemos convencer a los hombres? ¿Cómo podemos ayudarles a cambiar? ¿Qué feminismo puede desactivar a la reacción?

Una cuestión (también) de clase

La densificación de la identidad de las mujeres ha conducido, como sabemos, a perspectivas feministas poco capaces de comprender cómo el género se intersecta también con la clase o la raza. Las feministas que nos oponemos a las miradas esencialistas de ciertos feminismos cuestionamos la tendencia a homogeneizar e igualar en exceso a las mujeres y reivindicamos la

necesidad de fracturar el sujeto mujer justamente para hacer aparecer las diferencias y desigualdades que nos atraviesan.

La otra cara de la moneda, y parte imprescindible de toda perspectiva interseccional, es cuestionar también la excesiva homogeneización de los hombres y poner de relieve las jerarquías y las relaciones de dominio y de desigualdad que existen también en el territorio de la masculinidad. Probablemente bell hooks sea una de las voces que más contundentemente ha puesto sobre la mesa que un feminismo con perspectiva de clase no puede pensar a los hombres solo como ganadores y que es problemático sostener la idea de que los hombres, todos ellos privilegiados con respecto a las mujeres, igualados por el patriarcado entre sí, participan por igual de su superioridad política, económica y social. «Las mujeres con privilegios de clase –dice bell hooks– son las únicas que han perpetuado la idea de que los hombres son todopoderosos, porque a menudo los hombres de sus familias sí que eran poderosos».

De hecho, si reflexionar sobre la masculinidad desde el feminismo es políticamente transformador es, precisamente, porque puede mostrar no tanto los éxitos como las fallas, las brechas o los fracasos a los que los hombres están abocados en un sistema capitalista y patriarcal. Como dice bell hooks, el relato de que el dominio sobre las mujeres reporta siempre privilegios, éxitos y beneficios a los hombres es justamente funcional para el adoctrinamiento masculino, que, para reclutar a los hombres, debe ocultar todos los fracasos y malestares a los que les arroja una sociedad patriarcal.

Así pues, «la idea de que los hombres tenían el control, el poder, y estaban satisfechos con su vida antes del movimiento feminista contemporáneo es falsa». El patriarcado genera soledad, silencio, incomunicación, violencia, suicidios y muertes en la población masculina y el feminismo debe politizar en clave transformadora todos esos malestares. Si no, lo hará la extrema derecha. ¿Cómo es posible que sean voces reaccionarias las que hablan de los altos índices de suicidios masculinos, de los accidentes mortales de tráfico o de las muertes violentas que padecen los hombres? ¿Cómo puede ser que los males que justamente el patriarcado genera en los hombres sean usados como un argumento contra el feminismo y no a su favor?

Salir de los marcos identitarios implica, por lo tanto, pensar que el malestar contemporáneo de los hombres no es (al menos no principalmente) un efecto de los avances del feminismo. Es la reacción la que pone a funcionar ese mito, y eso debería darnos una pista de hasta qué punto no lo podemos comprar. Michael Kimmel sugiere que para entender la emergencia de proyectos reaccionarios racistas, homófobos y machistas hay que rastrear los miedos masculinos en una sociedad en la que la precariedad económica ha hecho especialmente imposible que los hombres puedan cumplir con los imperativos de la masculinidad tradicional.

El rol del proveedor de la familia ha quedado socavado por las fuerzas económicas que o bien expulsan a los hombres (y mujeres) del mercado laboral o nos condenan a la precariedad. ¿A qué tipo de fracasos están hoy abocados quienes han sido educados para ser padres de familia que garantizan protección y estabilidad a los suyos? ¿Es posible seguir siendo un hombre *de verdad* en un contexto de empobrecimiento generalizado de la población, desempleo y permanente amenaza de pérdida de estatus social? La tesis de Kimmel es que las nuevas extremas derechas americanas, preludio del triunfo de Trump, supieron politizar esa frustración masculina, propia de nuestras sociedades capitalistas tardías, orientándola contra chivos

expiatorios: las mujeres feministas, las personas LGTB o migrantes.

La cuestión, por tanto, es qué marcos y discursos feministas necesitamos para volvernos contra los verdaderos responsables. Frente a quienes buscan falsos culpables, tenemos una imprescindible tarea por delante. Y no pasa por considerar ajenos los malestares masculinos, mucho menos darlos por sentado o incluso celebrarlos como el efecto colateral que da pruebas de nuestros éxitos, sino entenderlos —lo que, por supuesto, no es lo mismo que justificarlos— y dotarlos de sentido. Politizar el malestar masculino contra los de arriba, cambiar los bandos y hacer del feminismo una lucha donde hombres y mujeres combatamos juntos tanto los mandatos de género y sus violencias como el capitalismo y las suyas es uno de los principales retos de todo proyecto político que pretenda enfrentarse con éxito a la emergencia de las extremas derechas.

Una perspectiva estructural

El rechazo de ciertos feminismos a incorporar a los hombres tiene que ver, supuestamente, con el miedo a que quede desdibujada la desigualdad. Pareciera como si la incorporación de los hombres en tanto que objetos del patriarcado —subsumidos y atrapados también en los mandatos de género— fuera a relativizar su responsabilidad en la dominación que ejercen y supusiera inevitablemente una infravaloración de sus privilegios. Estos marcos, sin embargo, dibujan una disyuntiva paralizante: o bien somos objetos del poder o bien tenemos responsabilidad y agencia. De este modo, para ser objetos de una estructura patriarcal —lugar que estaría reservado a las mujeres— debemos ser víctimas pasivas de sus mandatos. Para ser agentes responsables —lugar que estaría reservado en exclusiva a los hombres— debemos ser sujetos puros, absueltos de las estructuras y libres de toda dominación. ¿Pero es necesariamente así? ¿Son los hombres los agentes del patriarcado pero no sus víctimas? ¿Inventan los hombres, como artífices externos, el patriarcado, o más bien forman parte de ese sistema, son productos de él y permanecen atados en su interior?

El identitarismo produce una invasión de lo moral y una regresión de lo político: necesita víctimas puras, tan puramente inocentes como puramente impotentes, y victimarios puros, tan esencialmente culpables como aparentemente poderosos. Hay, por tanto, una exacerbación de la agencia individual de los hombres —en detrimento del peso de lo estructural— y una paralizante victimización pasiva de las mujeres, que quedan desprovistas de responsabilidad y, por tanto, también de margen para la acción.

Los discursos identitarios en auge tienden a producir un efecto despolitizador en la medida en la que desaparece el peso estructural del patriarcado como sistema de dominación. Que sea un sistema o una estructura quiere decir, justamente, que todos los sujetos que forman parte de ella están *sujet(ad)os* a dicho sistema, subsumidos, producidos por él y que, por consiguiente, tanto hombres como mujeres son objetos de una dominación (tal como explica excelentemente Pierre Bourdieu en *La dominación masculina*). La radicalidad del feminismo como teoría social descansa fundamentalmente en esta cuestión: el análisis de una estructura social enormemente poderosa e insidiosa de la que todos y todas formamos parte. Los hombres son beneficiarios de ciertos privilegios y, al mismo tiempo, objetos de una determinación estructural. Las mujeres, principales damnificadas por una estructura de desigualdad social, pueden también participar en el mantenimiento de los imperativos de género que sobre unas y otras impone una sociedad patriarcal.

Los feminismos contemporáneos que están centrados en resguardar y patrullar las fronteras de su sujeto político y necesitan densificar una identidad fuerte de «las mujeres» están contribuyendo a una esencialista santificación de la víctima —a una política «victimista», en palabras de Wendy Brown—, donde el sujeto político (las mujeres, supuestamente únicas víctimas del patriarcado) queda investido de verdad, pureza y bondad pero desprovisto de cualquier margen de emancipación. Abren también la puerta a discursos contemporáneos sobre la masculinidad que restauran un sujeto inverosímil al que asiste una autonomía, autosuficiencia y radical independencia clásicamente masculina y neoliberal.

Si la responsabilización de los hombres pasa por convertirlos en sujetos externos a la estructura y absueltos del sistema de dominación, estaremos, paradójicamente, disolviendo el poder del género, la importancia del patriarcado y su carácter estructural.

Emancipación colectiva o volver a disputar la libertad

Uno de los retos que las izquierdas tienen en el siglo veintiuno, tanto frente a las nuevas ultraderechas emergentes como frente al imaginario neoliberal, es reconquistar la idea de libertad. Así que otras de las cuestiones es hasta qué punto uno de los principales frentes de lucha política al día de hoy —el feminismo— puede estar en condiciones de llevar a cabo esa disputa con éxito. O, lo que es lo mismo, qué feminismo puede resignificar la noción de libertad más allá de los marcos neoliberales.

La cuestión es que los feminismos atrapados en la identidad ponen en marcha discursos del agravio —centrados en el dolor y el daño a las víctimas, que son solo una parte de la sociedad— y no de la libertad colectiva. Es desde ese centramiento en una política de la víctima agraviada y convertida en el sujeto político desde donde se considera que es incompatible denunciar los privilegios masculinos y, a la vez, decir que el feminismo tiene cosas buenas que ofrecer a los hombres y que lucha también contra las servidumbres que los oprimen a ellos. Y son justamente esos discursos feministas que ponen siempre el acento en los privilegios que los hombres tienen que perder, pero nunca en las libertades que los hombres tienen que ganar, los que asumen unos marcos compartidos con la reacción: o ellas o nosotros. Esta lógica de suma cero, donde si unos ganan es siempre a costa de que otros pierdan, forma parte del *corpus* ideológico que sostiene al patriarcado. Pero, además, está en consonancia con una limitadísima y negativa noción de libertad que la redibuja dentro de los marcos del neoliberalismo.

La disputa por la idea de libertad es posible desde los feminismos, pero solo saliendo de marcos esencialistas e identitarios. Más allá de ellos hay una idea más ambiciosa y revolucionaria: que la libertad de unos requiere la libertad de otras y viceversa. Y, de nuevo, solo así puede entenderse la emancipación que promete el feminismo, si entendemos el patriarcado como un problema estructural. Si la lucha feminista tiene que enfrentarse a un sistema de género que nos adoctrina de forma diferenciada a unos y a otras y prescribe comportamientos y destinos sociales diferentes para hombres y para mujeres —eso que llamamos «género»—, ¿hasta qué punto se puede combatir ese sistema de opresión sin combatir *todos* los mandatos de género? ¿Podrían acaso las mujeres liberarse del sistema de género y del patriarcado si no se liberan también los hombres? ¿Pueden los hombres ser más libres sin combatir junto a nosotras la desigualdad?

No hay nada más movilizador y transformador que implicarnos a todas y a todos en un proyecto político donde revertir las desigualdades sea apostar juntos por nuestra propia libertad. Es en ese marco donde los discursos de las extremas derechas no pueden reclutar a los hombres contra las mujeres, donde escapamos a las lógicas liberales que entienden siempre la libertad de unos como limitadora de la libertad de otros. Es dentro de estas perspectivas donde los discursos sobre la masculinidad pueden significar un importante paso hacia delante en la transformación de nuestra sociedad.

Pero solo podremos avanzar en ese camino con una política que renuncie a refugiarnos en la confortable identidad que nos garantiza un feminismo solo de y para las mujeres. Combatir hoy a la extrema derecha, así como la precariedad y los miedos de los que se alimenta, requiere apostar decididamente por un feminismo para todo el mundo, un feminismo popular y radical.

[Fuente: [Jacobinlat](#)]

Isabel Otxoa

Trabajadoras del hogar y cuidados: nuevos derechos, aunque insuficientes

Felipe González había dejado ya la pana y presidía el Gobierno cuando la prensa publicó la descripción del chalé que se estaba haciendo. El dormitorio del servicio doméstico iba en la planta del garaje subterráneo. Hoy hay resoluciones judiciales que dan por probada una jornada laboral de cuarenta horas semanales en el trabajo interno, cuando la trabajadora vive sola al cuidado de una anciana con Alzheimer avanzado. Es decir, algo a todas luces imposible. La equiparación del contrato de hogar y cuidados cuenta con una dificultad específica: un porcentaje alto de las personas que tienen en su mano las reformas o la aplicación de la normativa desde las instituciones públicas son parte interesada en tanto que empleadoras.

Podría decirse esto mismo de cualquier norma, pero es especialmente cierto para las que pretenden regular el empleo de hogar. En un terreno en el que la correlación de fuerzas es incomparablemente favorable a la parte empleadora, no hay reformas que valgan si no vienen acompañadas de mecanismos para su efectividad. Esta es la experiencia de los últimos once años del Real Decreto 1620/2011 de empleo de hogar, cuyo balance es que el porcentaje de inaplicación de sus disposiciones ha sido superior al 50% en prácticamente todos los apartados y en algunos llega al 90%. Véanse las estadísticas que año tras año publica la [Asociación de Trabajadoras del Hogar Bizkaia](#).

No se sabe cuántas son las trabajadoras de hogar y cuidados. Si en el INE se recogen 545.700 personas en la rama de actividad en el segundo trimestre de este año y las personas dadas de alta en la Seguridad Social en agosto eran 368.848, se podría utilizar estas dos cifras para tratar de conocer la economía sumergida en el sector. Pero parte de las altas de Seguridad Social cuentan varias veces a una misma persona que se encuentra pluriempleada, y la cifra total de trabajadoras activas probablemente no sea exacta ya que no recoge fielmente a las que se encuentran en situación administrativa irregular. Según las cifras que manejamos en [nuestra asociación](#): en 2021, el 34% de las internas y el 11% de las externas que pasaron a consultar trabajaban sin papeles. Esta barbaridad se ha naturalizado, como también se ha asumido el que muchas de ellas trabajen en condiciones muy inferiores a las del resto. Se podría pensar que las afectadas soportan la situación por un estado de necesidad económica, pero no es así siempre. Una parte resiste en las casas por la promesa de obtener una oferta de trabajo que les permita su regularización. Es la Ley de Extranjería la que opera de yugo que las ata a un trabajo sin condiciones decentes.

La nueva reforma –el Decreto Ley 16/2022–, publicada en el BOE del 8 de septiembre, trae mejoras importantes con consecuencias prácticas. La indemnización del despido improcedente pasa de 20 a 33 días por año, y desaparece la figura del desistimiento, que era la posibilidad de despedir a una trabajadora sin explicar los motivos, con una indemnización de doce días por año. En adelante, la indemnización permanece en doce días, pero tendrán que estar justificada sobre la base de circunstancias económicas o personales de la parte empleadora. (Le llamaré empleadora, pero es un femenino genérico, los hombres son quienes más se benefician del empleo de hogar, idea que ahora no puedo desarrollar). También se podrá cesar a alguien por un

comportamiento que fundamente de manera razonable y proporcionada la pérdida de confianza. El desistimiento recién derogado era una manera insultante de despedir, y así lo reflejaba el disgusto y desconcierto de las afectadas. Ahora la empleadora tendrá que bajar al barro y decir por escrito el porqué, aunque se lo invente. Intentaremos sacar los 33 días por año. El llamado despido por causas objetivas del Estatuto de los Trabajadores (ET) se indemniza con veinte días, no con doce, por lo que en esto no hay equiparación.

Hay algo que la reforma no ha hecho, que hubiera sido de justicia elemental. Muchas de las internas e incluso de las externas que cuidan, al fallecer la persona después de años de intensa dedicación, se encuentran en paro con una indemnización de un solo mes de salario, independientemente de su antigüedad. Es una norma que proviene del Estatuto de los Trabajadores y se aplica al sector, pero estoy convencida que esta excepción no existiría si no fuese porque en las relaciones laborales ordinarias el cese por fallecimiento del empleador es poco usual. Pero en el trabajo del hogar esa situación es pan de cada día.

Cotizaciones previas que desaparecen

En materia de Seguridad Social, se reconoce la prestación de desempleo. La reforma era obligada a partir de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarase ilegal la exclusión del sector. Pero para tener derecho a prestaciones y subsidios será necesaria la misma cotización previa que se pide al resto, lo que está generando decepción entre las trabajadoras, que esperaban otra cosa. Reparar la discriminación exigía haber considerado como válidos para el desempleo los periodos previos cotizados para el resto de las contingencias, pero no ha sido así. El sistema funcionó de manera más generosa en los ERTES del periodo Covid, al reconocer la prestación a toda la plantilla, incluidas las personas que no tenían historial de cotización. Por no mencionar el trato que se dio a la Iglesia Católica en periodo constitucional (o sea, no fue Franco) al permitir a curas y frailes empezar a cobrar la pensión de jubilación sin haber alcanzado los años de cotización que se exigían al resto.

La reforma retrasa hasta el 2024 la integración total en el Régimen General de la SS, con la cobertura de vacíos de cotización para el cálculo de las pensiones y la cotización por salarios reales. Repaso la historia: en 2011 se suprime el Régimen Especial de Seguridad Social y se integra parcialmente en el Régimen General (RG), dejando para el 2019 las dos cuestiones que he mencionado. En el debate de la Ley de Presupuestos de 2018, el PP introduce una enmienda para atrasar la implantación de las medidas hasta el 2024. Este es el detonante de importantes movilizaciones del sector en el verano de 2018, pero la enmienda se aprueba. PSOE y Podemos acuerdan en un primer pacto adelantar las medidas a 2021 y en pacto posterior rectifican fijando la fecha en 2023. Esto último se elevó a Ley, que ahora se ha derogado para atrasar la equiparación al año 2024. Misterios del activismo: las organizaciones de trabajadoras de hogar que han aparecido en conversaciones con el Ministerio de Trabajo en estos últimos meses no mencionan la cuestión del nuevo aplazamiento, del que tampoco la ministra informó al presentar la reforma.

El tema de la cobertura de vacíos es importante: en el Régimen General, cuando una persona tiene periodos no cotizados porque no trabajaba, a la hora de calcularle la pensión se le consideran los periodos como si los hubiese cotizado (no entro en detalles). En Hogar, esos periodos no se consideran cotizados, por lo que entre dos personas que hayan cotizado el mismo

tiempo y las mismas cantidades, la que está incluida en el régimen general tendrá una pensión más alta que la trabajadora de Hogar.

Volviendo a la efectividad de las normas, las trabajadoras no pueden contar con el recurso a los Juzgados de lo Social, que pueden tardar uno o dos años en examinar sus demandas. Esto se convierte en un arma en manos de la otra parte, que consigue así acuerdos a la baja con quien tiene la urgencia de cobrar.

Incumplimientos

Hay que decir que las Administraciones públicas han incumplido sistemáticamente las normas sobre empleo de hogar sin otra explicación que el desprecio al sector. Solo un par de ejemplos. El servicio vasco de salud, Osakidetza, todavía en 2018 seguía tratando como enfermedades comunes lo que desde la reforma de 2011 eran ya claros accidentes de trabajo; la Tesorería General de la Seguridad Social del PSOE, haciendo caso omiso a las subidas del salario mínimo desde 2019, permitió durante dos años que prácticamente todos los empleadores cotizasen por cantidades muy inferiores a las legales, a pesar de que lo habíamos denunciado una y otra vez. Cuando la Inspección de Trabajo decidió actuar para enmendar el asunto en 2021, tuvimos la prueba de lo que pueden hacer cuando se ponen a ello.

La Inspección de Trabajo no actúa contra las agencias de colocación cuyo negocio es captar trabajadoras intermediando en contratos verbales por debajo de la ley, que blanquean después con contratos escritos formalmente impecables. Denuncias contra falsas cooperativas que están estafando a las trabajadoras, se quedan con su dinero, les amedrentan para que no dejen el empleo, etc., no tienen respuesta eficaz de la Inspección, porque los casos siguen apareciendo. Las plataformas de internet de ofertas de empleo de hogar en condiciones abiertamente ilegales funcionan con una impunidad espectacular. Y sí habría manera de cortar esto.

Los perfiles del trabajo interno están deliberadamente desdibujados en la ley vigente para dar lugar a la situación actual: 76% trabajan más de 60 horas semanales. Qué es la pernocta –dormir en un domicilio que no es el propio–, cuándo empieza y cuándo acaba, cómo debería pagarse y en qué casos, cuáles deben ser las condiciones del alojamiento y cuestiones así. Conectado con esto, el Real Decreto incluye el empleo de hogar de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y anuncia un reglamento. La inclusión en esta ley no garantiza nada, hasta la fecha la intervención de la Administración en el área ha consistido en editar guías que no lee nadie, con recomendaciones nada operativas. La norma proclama el derecho a recibir protección eficaz de la seguridad y salud laboral especialmente en el ámbito de la prevención de la violencia contra las mujeres. No entiendo la jerarquización de los ámbitos de protección que pone por delante la violencia, salvo que sea una frase hecha. Pueden ser igualmente lesivas física y mentalmente la falta de descanso, de privacidad del alojamiento, ausencia de vida social, insuficiente reconocimiento moral y salarial, y carencia de formación y medios para realizar el trabajo.

El contrato de trabajo entre dos personas particulares, dentro del domicilio de una de ellas, consistente en atender necesidades personales sean estas las que sean, tiene riesgos que no existen en otras actividades. Pero en definitiva, una política de organización de los cuidados con servicios externos debería dejar el empleo de hogar en algo residual.

[Fuente: [Cxtt](#). Isabel Otxoa es miembro de la Asociación de Trabajadoras del Hogar Bizkaia Etxebarrukoak]

Historia de la Comuna de París

Pról. de Eric Hassan. Introd. de Eleonor Marx. Trad. de Blanca Gago Domínguez

Capitán Swing Madrid 2021 648

Tienes que leerlo

Josep Torrell

Éste es un libro que las personas que seguís siendo de izquierda tenéis que leer (si no lo habéis hecho ya): con la aparición de *La historia de la Comuna de París de 1871*, por primera vez un autor rescató todo el valor y el coraje de la Comuna. Se había publicado aquí en 1971, en las Ediciones de Bolsillo de la editorial Estela (en dos volúmenes), pero la editorial cerró al poco (y, con su desaparición, se esfumaron también sus libros).

Prosper-Oliver Lissagaray era un publicista, aunque fue también un destacado *communard* (conocido como Lissa). Su historia es objetiva, documentada y muy fiable, tan fiable cómo son lo son los títulos de Eric Hobsbawm, Edward P. Thompson o Josep Fontana.

Aunque Lissagaray tiene además un valor sumamente importante: su innata sabiduría y la empatía ante un relato de los hechos de la Comuna. No se trata de una historia de los dirigentes (o no sólo): por el contrario, es uno de los testimonios dedicados a las mujeres y los hombres que vivieron (y murieron) en pro de la Comuna. Dicho de otro modo: trata del coraje (aunque también de los fallos) de los *communards* del 18 de marzo de 1871 y del levantamiento de la bandera roja, que llevó a la izquierda al ayuntamiento (con el consiguiente ataque de los versallescos y la *semana sangrienta* posterior a la Comuna). Por cierto, el ejército prusiano detuvo la guerra contra Francia hasta el fin de París: *nobleza obliga*, dicen.

Hay un hecho que explica esta diferencia. Al contar el 18 de marzo, Lissagaray sólo cita los partidos de izquierda: 172 electos. ¿Por qué? Sencillamente porque los de derechas huyeron rápidamente hacia Versalles; otros decidieron que ya habían conseguido el objetivo que querían (la izquierda en el gobierno de París) y siguieron continuando con su vida cotidiana; y otros más se dedicaron a levantar los cimientos de la Comuna (y no tuvieron el tiempo de asistir a las tres asambleas diarias de la Comuna). Sólo una vez —en pleno bombardeo de París— se efectúa una reunión urgente con menos de ochenta delegados.

Los miembros de la Comuna estaban en la defensa de París: hombres, mujeres —fueron ellas las que levantaron la defensa ante el intento de sacar los cañones de Versalles— y *niñas y niños* (todos fusilados sin compasión). Lissagaray pone el acento en el papel desempeñado por algunas de mujeres (ejemplar en 1789, 1848, etcétera).

La documentación es exhaustiva. Basta poner algunos ejemplos: una colina de los soldados de la Comuna era bombardeada con *un explosivo cada minuto y durante las 24 horas* por unos cuarenta cañones versallescos; a medida que el ejército versallesco iba penetrando en París, sus cañones iban bombardeando los lugares que iban a tomar; cada mujer que portaba un jarro —seguramente para ir a buscar agua— era inmediatamente fusilada por los versallescos por ser considerada como *incendiaria*; además, hay que considerar que un cañón del siglo XIX podía

fallar y hacer estallar un edificio distinto del que estaba destinado. El resultado fue —para los versallescós— la demolición de París... *¡hecha por la Comuna!*

El libro se abre con una amplia perspectiva histórica de los hechos político-sociales de Francia en 1848 y 1871. Y se cierra con los veinte mil fusilados, los encarcelamientos en los pontones y el envío de los presos a Cayena y Nueva Caledonia (hasta el fin de los ochenta del s. XIX).

Karl Marx discutió —parágrafo a parágrafo— con el texto del libro y su hija Eleonor tradujo al inglés la primera edición. (Por cierto, ¿cuándo se editará en castellano una obra sobre Eleonor Marx, traductora, militante y propagandista?)

Ahora que la *España, república de trabajadores* de Iliá Ehrenburg parece más que nunca una entelequia, tal vez sea la mejor ocasión para leer este histórico relato de las y los *communard* que tuvieron izada su bandera roja durante veinte días.

En mi opinión es interesante que leas este formidable homenaje de este esfuerzo los insurrectos. Es un consejo. Sólo un amistoso consejo... de un viejo militante.

Agosto 2022

Nota sobre literatura y mercado

Nota sobre literatura y mercado

JRC

La rápida sustitución de las mercancías causa estragos en el gusto cuando se trata de libros. Lo último es lo más publicitado, y si se trata de un buen tomazo caro muchísimo mejor para el autor, el editor y el librero. Por eso no ha parecido inoportuno mencionar una serie de libros no desaparecidos pero sí poco visibles hoy, con los que un lector de narrativa puede pasar horas muy felices. Héla aquí:

R. L. Stevenson, *El señor de Ballantree*, 1889

T. Mann, *Los Buddenbrook*, 1901

V. Català, *Solitud*^[1], 1904

John Dos Passos, *Manhattan Transfer*, 1925

L.F. Céline, *Viaje al fondo de la noche*, 1932

A. Malraux, *La condición humana*, 1933

A. Huxley, *Ciego en Gaza*, 1936^[2]

Steinbeck, *Las uvas de la ira*, 1939

G. Greene, *El poder y la gloria*, 1940

C. Laforet, *Nada*, 1945

V. Nabokov, *Pnin*, 1957

H. Boll, *Billar a las nueve y media*, 1959

L. Martín Santos, *Tiempo de silencio*, 1962

V. Grossman, *Vida y destino*, 1980

W.G. Sebald, *Austerlitz*, 2001

1. *Solitud* de V. Català, pseudónimo de Catalina Albert, se puede leer con gran provecho si el lector consigue dar con una edición anterior a la poda del catalán por P. Fabra y leer el libro tal como fue escrito. [?](#)
2. No es relato, pero sí un libro muy notable, el de G. Bernanos, *Los grandes cementerios bajo la luna*, 1938 [?](#)

22 9 2022

Anatomía de las fronteras

El Salto Madrid 2022

Anatomía de las fronteras, el primer largometraje documental realizado por *El Salto*, recorre diversos enclaves del territorio español para entender las distintas dimensiones que conforman las fronteras: racismo y colonialismo, exclusión espacial, apartheid burocrático, un conjunto de factores de deshumanización y distancias que abren brechas insalvables para quienes intentan atravesarlas. Tenerife, Ceuta, los asentamientos de Huelva, los barrios guetizados de Barcelona, o las caras viviendas madrileñas donde esconden a las trabajadoras domésticas, son escenarios donde la frontera toma forma y se ensaña con quienes sólo reclaman su derecho a la existencia.

25 10 2022

Modelo 77

2022

Antonio Gímenez Merino

El director de *La isla mínima* o *El hombre de las mil caras* firma este nuevo drama con trasfondo político que muestra las vicisitudes de la creación de la Coordinadora de Presos en Lucha (COPEL), un movimiento de presos comunes condenados bajo la penalidad franquista que discurrió en paralelo a la negociación de la Ley de amnistía de 1977 y que se dio a conocer con el motín de la cárcel de Carabanchel del 1 de agosto de 1976. Como era de esperar, la proclama de libertad para los presos comunes (y no sólo los políticos) fue contestada tanto con brutalidad (como muestra el asesinato ejemplarizante del anarquista Agustín Rueda el 14 de marzo de 1978, días antes del asesinato por los GRAPO del director general de Instituciones Penitenciarias, Jesús Haddad) como con la más refinada desviación de los presos políticamente más activos a cárceles con módulos separados y celdas de aislamiento, como la de Herrera de la Mancha, inaugurada en junio de 1979.

El movimiento organizado por los propios presos no obtuvo la amnistía, claro es, pero sí la repercusión social suficiente como para lograr cierta depuración de jueces y funcionarios de prisiones franquistas o la mejora de unas condiciones de vida hasta entonces inhumanas, sellada con la Ley General Penitenciaria de 1979. Una repercusión, por cierto, que en la década siguiente decaería frente a la preocupación por la inseguridad ciudadana.

Justamente esto último es lo que hace más actual el relato ficcionado de estos hechos en *Modelo 77*, una película documentada y bien dirigida e interpretada que mantiene la atención del espectador hasta el final. Los hechos aquí reseñados (y otros complementarios, como la fuga de la Modelo —la misma cárcel en que se asesinó a Puig Antich en marzo de 1974— del 2 de junio 1978) constituyen el hueso de esta pieza de gran interés para comprender la mal llamada *transición*. Vale la pena complementar su visionado con el del documental [COPEL: Una historia de rebeldía y dignidad](#) (Grupo COPEL, Producciones La Hormiga, 2017) y el documento sonoro [COPEL, la transición de los presos comunes](#) (RNE, 2022).

26 9 2022

Fahmida Riaz

Cuatro paredes y un velo

Cuatro paredes y un velo

Señor, ¿qué quiere que haga yo con este velo negro?

¿Por qué me lo ofrece usted a mí como si me hiciera un grandísimo favor?

No estoy de luto para que me envuelva en él

y muestre mi tristeza y mi duelo a los demás.

Ni soy una enfermedad para que me hunda, humillada, en su oscuridad,

ni tampoco soy una pecadora ni una criminal

para que estampe sobre mi frente en todo momento el sello de su negrura.

Si no lo considera una impertinencia

y es tan clemente como para perdonarme la vida,

me gustaría, con toda humildad, rogarle algo.

Mi dueño y señor,

en la perfumada estancia de Su Excelencia yace un cadáver

putriéndose desde hace mucho tiempo.

Está reclamando su misericordia.

Hágale al menos este favor:

este velo negro no me lo dé a mí,

cubra con él el cadáver sin sudario que yace en su habitación,

porque el hedor que exhala

va jadeando de calle en calle,

dándose cabezazos contra los portones,

ocultando la desnudez del cuerpo.

Escuche por un momento esos gritos desgarradores

que están dando esos bultos informes
también desnudos bajo los velos.

¿Que quiénes son? ¡Usted lo debería saber!
Señor, ¡usted las debería reconocer!

¡Son unas criadas
a las que considera lícito secuestrar durante toda la noche
mientras de día vagan mendigando por la calle!

Señor, ¡son unas esclavas
deshonradas con los bastardos de su bendito esperma!

¡Son sus esposas
que cumpliendo con su deber marital
hacen fila esperando su turno!

¡Son niñas
cuya cabeza acaricia el señor con ademán afable
mientras su barba blanca está teñida de la sangre de menores!

En la perfumada cámara nupcial del señor
la vida ha derramado lágrimas de sangre.
Allí está ese cadáver.

Hace ya muchos siglos que se representa
este espectáculo sangriento
del asesinato de la humanidad.
Ahora ponga punto final a la función.

¡Señor, cierre el telón!

Este velo negro lo necesita usted, no yo,
porque mi presencia en la tierra no es sólo señal de lascivia.
Por el sendero real de la vida relumbra mi inteligencia,
en el sudoroso rostro de la tierra resplandece mi esfuerzo.

¡Honre con estas cuatro paredes y este velo a ese cadáver putrefacto!
A cielo abierto mi barca desplegará sus velas y avanzará.
¡Soy la compañera de viaje del hombre nuevo,
que se ganó mi amistad y mi plena confianza!

(Traducción de Rocío Moriones Alonso)

[Fahmida Riaz (1946-2018) fue una escritora y activista paquistaní. Su obra, en urdu, refleja sus posicionamientos feministas y sociales. Perseguida durante la dictadura del general Zia-ul-Haq, se exilió durante siete años en India. Está considerada una de las voces poéticas más importantes del subcontinente indio]